**MECANISMOS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CREDITICIA.
EVIDENCIA INTERNACIONAL Y LA EXPERIENCIA MEXICANA**

José Luis Negrin*
Diciembre 2000

Documento de Investigación No.2000-05

Dirección General de Investigación Económica

BANCO DE MÉXICO

* Agradezco la valiosa colaboración de Clara de la Cerda así como los comentarios de Joyce Sadka, Isaac Volin, Alejandro Díaz de León, Ricardo Paz, Rafael del Villar y Alejandro Werner. Agradezco también la ayuda de David Franco y Martha Jaime así como los comentarios de los participantes en los seminarios internos del Banco de México. Los juicios emitidos en este documento son responsabilidad estrictamente del autor y no necesariamente reflejan la opinión del Banco de México.

Mecanismos Para Compartir Información Crediticia. Evidencia Internacional y la Experiencia Mexicana

José Luis Negrín
Diciembre 2000

Documento de Investigación No.2000-05
Dirección General de Investigación Económica
BANCO DE MÉXICO

Resumen

El presente trabajo analiza la experiencia mexicana en el desarrollo de mecanismos para compartir información crediticia, denominados burós de crédito o Sociedades de Información Crediticia (SIC); para ello, se estudia el origen, evolución y funcionamiento de estas instituciones tanto a nivel teórico, como de experiencia internacional. Los burós de crédito permiten enfrentar los problemas de información asimétrica que conlleva la actividad crediticia; la identificación de los individuos impone una mayor disciplina de pago, permite un mejor análisis de riesgo y reduce el costo del crédito, todo lo cual redundará en una asignación de recursos más eficiente. Cuando el mercado es suficientemente amplio y los sujetos de crédito son heterogéneos o de alta movilidad las SICs pueden tener un origen privado y espontáneo; si este no fuera el caso, las autoridades financieras pueden formar un Registro Público de Información Crediticia (RPIC) de participación obligatoria. La experiencia internacional que se presenta, muestra que existe una estrecha correlación entre la profundidad del mercado de crédito y el desarrollo de mecanismos para compartir información; indica también que los países que poseen burós de origen privado, cuentan con mayor profundidad informativa que aquellos que poseen un RPIC; adicionalmente, en todos los países se observa una tendencia hacia la concentración industrial.

En México el crédito ha tenido una importancia limitada; por tanto, los mecanismos de información presentan una profundidad baja. Desde 1964 el Banco de México ha operado un RPIC, el cual posee una cobertura restringida. La expansión del crédito de principios de los años noventa evidenció las restricciones informativas, por lo que, de 1993 a 1998, se conformó una regulación que promueve la entrada de SICs y fomenta la formación de bases de datos amplias. Desde entonces, tres empresas han entrado al mercado. Una de ellas, el Buró de Crédito, es resultado de la asociación de los bancos comerciales mexicanos con Trans Union y Dunn and Bradstreet; esta SIC, ha mostrado un gran dinamismo, desplazando al RPIC y cubriendo algunos segmentos de información distintos. Las otras dos empresas han salido del mercado. Esto parece indicar que el sistema crediticio mexicano actualmente es muy pequeño para permitir la supervivencia de varias empresas de información. Aunque es aún muy pronto para evaluar la regulación, puede afirmarse que hoy en día se cuenta con mejor cobertura que la que existía a principios de la década de los noventa. El fortalecimiento de esta industria es una condición necesaria pero no suficiente para reactivar el crédito; sin embargo, en tanto el crédito no se eleve, el desarrollo del sector encontrará un límite cuando se llene el vacío de información que hoy aún existe.

Clasificación JEL: G2, K2, D8.

Introducción General

Los mecanismos para compartir información crediticia han adquirido relevancia en México dada la expansión del crédito en la primera mitad de los años noventa y la subsecuente crisis bancaria de 1994 y 1995. Las limitaciones en la información de que disponían las instituciones financieras acerca de los deudores –tanto de empresas como de personas físicas- al momento de conceder créditos se incluye como uno de los factores que explican el deterioro de la cartera bancaria. La importancia de tener mecanismos eficientes para compartir información crediticia se hace aún más evidente en la actualidad por que, por un lado, los prestamistas requieren actuar con extrema precaución en el otorgamiento de créditos nuevos; por otro, la mejor información permitiría relajar las actuales condiciones de los créditos en términos de tasas activas y de garantías.

El desarrollo de mecanismos para compartir información crediticia es una importante condición para alcanzar un sistema financiero sano y una eficiente asignación de los recursos. Sobre esa base, esta investigación tiene el objetivo de estudiar el origen, las funciones y las características de distintos esquemas para compartir información. Para ello, es necesario organizar en un cuerpo teórico coherente la literatura económica sobre el tema. El trabajo presenta también algunas experiencias internacionales en el desarrollo de sistemas para compartir información, para utilizarlas como referencia para el caso mexicano. Asimismo, se analiza la experiencia de México, la regulación y las perspectivas de la industria. Todo esto confiere una visión general del tema, así como un mejor entendimiento del caso de México.

Como ha sido establecido tanto a nivel teórico como práctico, los prestamistas enfrentan problemas de información asimétrica, pues frecuentemente desconocen el historial, las características y las intenciones de los solicitantes de crédito. Los problemas de *riesgo moral* y de *selección adversa* propician una mala asignación de los recursos crediticios en proyectos excesivamente riesgosos lo cual genera restricciones en el crédito otorgado, altas tasas de incumplimiento de pago y, finalmente, redundan en un incremento de la cartera vencida.

Para enfrentar estos problemas los otorgantes de crédito frecuentemente recurren a la *coordinación* para *compartir información* acerca del comportamiento pasado de sus clientes. Tal coordinación se realiza en torno a burós de crédito o sociedades de información crediticia (SIC), los cuales recogen, organizan, consolidan y validan la información de los clientes de las instituciones que proporcionan crédito; como contraparte, los prestamistas asociados al buró realizan consultas acerca del comportamiento crediticio de sujetos específicos, que pudieran estar contenidos en la base de datos del mismo. Se establece así, una relación de *reciprocidad* entre los socios y el buró. Si la mencionada coordinación no ocurriera voluntaria y espontáneamente, como indica la experiencia de muchos países, las autoridades financieras pueden conformar un registro público de información crediticia (RPIC) de participación obligatoria.

La experiencia internacional ha mostrado que existe una estrecha relación, sin establecer causalidad, entre la profundidad del mercado de crédito y el desarrollo de los

mecanismos para compartir información crediticia; para la muestra de países analizada en este trabajo, se encuentra que aquellos países en donde los burós se desarrollaron espontáneamente y son de origen privado, poseen mayor profundidad informativa que los países en donde se instauró un RPIC. Del mismo modo, se encuentra que en los países en que existían varios burós, hay una tendencia hacia la concentración en un menor número de instituciones; por otra parte, en los países que cuentan con un RPIC, se ha producido la entrada de burós privados, por lo que podría interpretarse al RPIC como un mecanismo transitorio para enfrentar el problema de inicio o de origen de los mecanismos para compartir información.

En México el mecanismo que inicialmente se utilizó para compartir información ha sido un RPIC; tal institución, denominada Servicio Nacional de Información de Crédito Bancario (Senicreb), fue fundada en los años sesenta como una dependencia del Banco de México. Hasta la primera mitad de los años noventa, cuando ocurrió la más reciente expansión crediticia, el Senicreb constituía el canal más importante para compartir información. El papel de esta institución como fuente de consultas, sin embargo, era y sigue siendo limitado no sólo por las características de su base de datos, sino porque su función principal es la generación de estadística y no el servicio de consultas.

Durante la crisis bancaria de 1994-95 se hicieron evidentes las carencias informativas que enfrentaban las instituciones crediticias mexicanas. Esto se relaciona, por un lado, con el limitado papel que el crédito ha tenido en la economía; por otro, con las restricciones con que ha funcionado el RPIC. De esta manera, a partir de 1993 y hasta 1998 se estableció un marco regulatorio que propicia la entrada de SICs, autorizándose la operación de tres empresas; dos de ellas ya han abandonado el mercado, probablemente por que enfrentaron una demanda limitada. La tercera, el Buró de Crédito, surge de la asociación entre los bancos comerciales mexicanos y empresas de información internacionales y ha registrado un alto crecimiento. El dinamismo del Buró en una etapa de contracción del crédito obedece a varios factores; por un lado, está cubriendo el vacío existente en lo que se refiere a información de personas físicas. Por otro, ha desplazado al RPIC del mercado de personas morales. Finalmente, la regulación obliga a las instituciones financieras a obtener un reporte antes de conceder un crédito; esas consultas se canalizan al Buró. Esta estructura industrial parece indicar que el mercado mexicano de información resulta aún muy delgado para permitir la subsistencia de varias empresas.

A pesar del buen desempeño del Buró, la información crediticia en México es aún limitada. Es posible que la expansión del Buró se mantenga en tanto no se satisfaga el vacío informativo existente; sin embargo, tal expansión encontrará un límite cercano, en la medida en que el crédito se mantenga estancado. Es decir, para que las sociedades de información se desarrollen, necesitan de bases de datos más amplias provenientes de la expansión del crédito; del mismo modo, para que el mercado de crédito adquiera mayor profundidad, requiere de mejor información de las SICs. De hecho, puede afirmarse que el desarrollo de las SICs es una condición necesaria pero no suficiente para que el crédito se reactive.

El presente trabajo tiene la siguiente estructura: en la primera sección se presenta una descripción del funcionamiento de los burós de crédito y se revisa la literatura sobre el

tema. En la segunda sección se examina la experiencia internacional en la materia; en la tercera se presenta la evolución del crédito en México. En la cuarta sección se analiza la historia, la regulación, la estructura de mercado y las perspectivas de los mecanismos para compartir información en México. Finalmente, se presenta un apartado de conclusiones.

1. Antecedentes y Revisión de la Literatura

1.1. Generalidades

Es conocido en la literatura económica que los mercados de crédito presentan problemas de información asimétrica; ello obedece a que las instituciones prestamistas no conocen la historia, las intenciones ni las características de los solicitantes de crédito. Para decidir otorgar un crédito así como los términos del mismo, el prestamista¹ debe identificar el riesgo que implica; para ello requiere información, que frecuentemente desconoce, acerca de los solicitantes o del proyecto. Parte del problema, denominado *riesgo moral*, radica en que el prestamista no puede vigilar perfectamente las acciones del receptor del crédito. Así, si el sujeto de crédito es una empresa, el banco no conoce el verdadero nivel de riesgo del proyecto, ni el esfuerzo que el deudor invertirá para que la inversión tenga éxito y pueda así repagar el préstamo. Alternativamente, aún habiendo obtenido ganancias, el deudor puede decidir no pagar si no existen mecanismos que lo obliguen a hacerlo. En el caso de un crédito a una persona física, al desconocer las características y el historial de un sujeto, pueden otorgarse créditos a individuos que posean un historial de no cumplir con sus deudas. Dadas las limitaciones de información, los prestamistas toman decisiones de crédito basándose en las características promedio del conjunto de solicitantes y no en las específicas de cada sujeto (Rothschild y Stiglitz, 1976). Esto resulta en un deterioro de la probabilidad de pago promedio, que se traduce en el encarecimiento del crédito y en la ampliación de la brecha entre las tasas de interés activas y pasivas.

El alza en las tasas de interés activas propicia el problema de *selección adversa*, pues solo los agentes de alto riesgo están dispuestos a pagar tasas elevadas (Stiglitz y Weiss, 1981). De hecho, los clientes que no han cumplido con las obligaciones contraídas con un prestamista buscarán otras fuentes de crédito, lo que eleva el nivel de riesgo promedio así como las tasas de interés correspondientes. Esto genera una mala asignación de los recursos crediticios en proyectos excesivamente riesgosos y propicia restricciones en el crédito otorgado aún para los deudores de bajo riesgo.

La *coordinación* entre los otorgantes de crédito para *compartir* con otras instituciones crediticias información acerca del comportamiento pasado de sus respectivos clientes, alivia los problemas de información asimétrica descritos². Esta es precisamente la función del buró de crédito. El acceso a la base de datos del buró, permite a las instituciones acreedoras³ identificar a aquellos clientes que no cumplieron sus obligaciones con cualquiera de las instituciones asociadas. Ello reduce el problema de selección adversa. Una vez que los solicitantes de crédito saben que la información sobre su

¹ En aras de la sencillez, se denomina como *bancos* a todos los usuarios, suscriptores y socios del buró, aunque no solamente los bancos generen información y se asocien con las sociedades de información.

² Es relevante mencionar que existe una extensa literatura acerca de mecanismos para compartir información al nivel de asociaciones industriales, como la industria automotriz, la del acero, etc.; compartir información crediticia es diferente porque el efecto sobre las decisiones de las empresas asociadas, es mucho más importante. Una buena revisión de la literatura acerca de compartir información en asociaciones comerciales se encuentra en Vives, 1990.

³ Suponiendo que todos los generadores de información se asocian con el mismo buró de crédito o que solamente existe un buró.

comportamiento puede ser obtenida por los prestamistas, tienen un incentivo para cumplir con sus obligaciones; este *efecto disciplinario* (Padilla y Pagano, 1997) contribuye a reducir el problema de riesgo moral. Además, el acceso a una base de datos amplia permite a las instituciones crediticias realizar un análisis de riesgo más certero y fomenta la competencia entre los otorgantes de crédito. De esta forma, compartir información puede redundar en una menor cartera vencida, en la reducción de la brecha entre las tasas de interés activas y pasivas, y en la mejor asignación de los recursos crediticios.

A pesar de las ventajas que representa la coordinación para compartir información crediticia, no todos los países disponen de mecanismos que cumplan con esa función. El origen y desarrollo de estas instituciones en los países que cuentan con ellas, no es homogéneo. En ocasiones la coordinación para compartir información tiene un origen privado, espontáneo y voluntario, sin la participación de las autoridades financieras; tal es el caso de los conocidos burós de crédito, que en su origen solían tener un carácter regional y una cobertura especializada. En otras ocasiones, la propia falta de desarrollo de burós de crédito privados, ha conducido a las autoridades financieras a formar un registro público de información crediticia (RPIC); en este caso, la participación en el mecanismo es obligatoria y la cobertura es principalmente de información financiera. Aunque existen diferencias entre los burós de crédito y los registros públicos, ambos mecanismos permiten el acceso a una amplia base de datos de deudores; sin embargo, su grado de efectividad es distinto.

Un aspecto relacionado con el origen institucional es la cobertura del buró. En sus inicios, los burós solían tener una cobertura regional y especializada, es decir, se limitaban a recolectar información generada en cierta zona y sobre una industria específica (*cobertura especializada*). Conforme se fueron desarrollando, los burós se extendieron hasta abarcar información de todas las fuentes de crédito (*cobertura universal*) generada en todas las regiones del país en que se encuentran. En la actualidad, en la mayor parte de los países la tendencia es hacia la conformación de burós nacionales con cobertura universal. Sin embargo, hay muchos casos de burós de cobertura especializada, como los RPIC y aquéllos de cobertura regional⁴.

En los siguientes apartados se presentan las características, el funcionamiento y los argumentos encontrados en la literatura económica acerca de los mecanismos para compartir información. La mayor parte de los argumentos se han desarrollado para mecanismos de participación voluntaria pero, al menos en términos de funcionamiento, aplican también para registros públicos.

1.2. Acerca del origen de los mecanismos para compartir información

El surgimiento de mecanismos para compartir información crediticia enfrenta diversos problemas. En primer lugar, las empresas que consideran asociarse deben tener plena confianza en la honestidad y neutralidad de la institución que maneja la base de datos, para decidir proporcionarle su información. Los suscriptores potenciales deben tener la certeza de que la información transmitida al buró o al registro público será manejada de

⁴ Algunos burós tienen ya cobertura internacional; tal es el caso de Equifax.

manera imparcial, de modo que no se favorezca a ningún socio en particular⁵. Cuando el mecanismo es un registro público, las autoridades financieras avalan el manejo que se hace de la información; cuando se trata de burós privados, la calidad moral de los mismos es avalada por el mercado: aquellos burós que no sean manejados de manera imparcial, tenderán a tener menos suscriptores y en el largo plazo cerrarán⁶. A este respecto es importante subrayar que los reportes que proporcionan los burós a sus socios incluyen datos sobre las cantidades adeudadas pero omiten los nombres de las instituciones con quienes el sujeto tiene adeudos pendientes. Esto permite mantener la confidencialidad acerca de los balances de los prestatarios.

En segundo lugar, las instituciones crediticias pueden optar por no participar en el mecanismo para evitar enfrentar competencia por parte de otras empresas que estén asociadas con el buró. Como se explica en detalle más adelante, al proporcionar información al buró y bajo ciertas circunstancias, las empresas sacrifican cierta ventaja sobre los clientes que ya han identificado, en aras de reducir los problemas de información.

En tercer lugar, la formación de una base de datos amplia genera importantes externalidades que no son internalizadas en su totalidad por cada empresa que se suscribe. Cuando una empresa se integra al buró de crédito, no solamente el nuevo asociado recibe beneficios directos al tener acceso a la información concentrada, sino que su participación enriquece la base de datos del buró; esto genera externalidades positivas para todos los socios originales. Evidentemente, mientras más amplia sea la base de datos de la empresa en cuestión, mayores son las externalidades que genera. Adicionalmente, los participantes potenciales no perciben los beneficios de antemano, sino hasta que ya está el mecanismo en funcionamiento, lo cual dificulta aún más la decisión inicial de participar.

Estas dificultades generan el conocido *problema de inicio* o de *start up* en la formación de burós de crédito que en ocasiones impide la formación de burós y en otros casos, evita que las bases de datos sean completas. Refiriéndose a los mecanismos de participación voluntaria, Klein (1992) afirma que existen tres tipos de equilibrio en el mercado de información crediticia; en el equilibrio menos deseable, nadie comparte información, mientras que en el equilibrio óptimo, todos los generadores de información están asociados con algún buró. Hay múltiples equilibrios intermedios en donde algunos generadores de información no son socios de ningún buró.

Basándose en los supuestos de que las instituciones crediticias “proveen crédito” y que pagan una cuota de participación o de asociación⁷, Klein (1992) analiza la decisión de suscripción al buró. Cuando no existe ningún otro suscriptor, ninguna empresa tiene incentivos para unirse al mecanismo; esto da lugar al equilibrio malo donde no se comparte información. Klein encuentra que cuando la base de datos del buró es más grande (y mayor es el número de empresas asociadas), los deudores tienen mejores incentivos para cumplir

⁵ Es posible que si uno de los socios del buró tuviera acceso a más información que otros, podría intentar apoderarse de los buenos clientes de los demás socios.

⁶ En el caso de México, la autorización para que una empresa preste servicios de información crediticia, está sujeta a que los dueños y los gerentes de la misma, sean personas de reconocida calidad moral. Ver regla décima de las reglas generales a que deberán sujetarse las SICs de febrero de 1995.

⁷ Klein supone que el buró no cobra por consulta, sino solamente una cuota fija por periodo.

con sus obligaciones⁸. De este modo, una base de datos amplia genera mayores beneficios esperados para los socios potenciales y hace más atractiva la suscripción, dada la cuota de participación. Cuando el beneficio esperado es mayor que el costo de la suscripción, la empresa decide formar parte del buró; en el caso contrario, la institución no se asocia con el buró⁹. La decisión de no suscribirse evita que se llegue al equilibrio en el que todas las empresas que generan información forman parte de un buró. Contrariamente, Pagano y Jappelli (1993) afirman que una vez que una proporción significativa de las empresas crediticias comparte información, crecen los incentivos para la participación de las otras al punto que todas las empresas terminan por asociarse al buró¹⁰.

La literatura ha identificado varios factores que dan lugar al deseo de compartir información. Pagano y Jappelli (1993), afirman que el *tamaño de la población* de solicitantes de crédito influye sobre la necesidad de tener un buró: mientras mayor sea la población, más factible será el surgimiento del buró. En el mismo sentido, Klein (1992) indica que los burós de crédito en una sociedad muy grande¹¹, en donde los contactos son anónimos, juega el papel del “chisme” en las comunidades pequeñas, por lo que el buró sólo emerge en sociedades suficientemente grandes. Según Pagano y Jappelli (1993), en aquellos países en donde los individuos tienen mayor *movilidad* y son más *heterogéneos* en sus características de pago, el buró se vuelve más necesario, lo que hace más factible que emerja espontáneamente¹².

Otro elemento importante en el surgimiento de los burós de crédito es la estructura de mercado existente al nivel de los proveedores de préstamos. Pagano y Jappelli (1993), Jappelli (1997) y Padilla y Jappelli (1997) plantean que cuando existe poca competencia a nivel de los bancos es más factible que se comparta información. Este argumento supone que cuando los deudores que tienen un historial deciden acudir a otros prestamistas, no pueden demostrar su desempeño pasado; también supone que al compartir información, los bancos entregan toda la información relevante. En estas circunstancias, la falta de un mecanismo para compartir información permite a los prestamistas obtener una ganancia extraordinaria aún cuando estén enfrentando competencia de otras instituciones; esta *renta informacional* surge del cobro de tasas de interés elevadas a aquellos clientes que cada banco ha identificado como de bajo riesgo. Así, la falta de un mecanismo para compartir información impide la competencia por los clientes buenos y permite a los prestamistas la obtención de rentas informacionales; de ahí que los bancos puedan no estar dispuestos a

⁸ Klein denomina la *virtud del consumidor* al incentivo que reciben los deudores para cumplir con sus obligaciones cuando existe un buró de crédito; mientras mayor sea el tamaño del buró, mayor es la virtud del consumidor pues sus incentivos para el repago son más altos.

⁹ Klein (1992) analiza el caso en el que algunas empresas deciden no asociarse con el buró porque la lista de los socios del buró no es pública. Puesto que los deudores no saben cuáles empresas forman parte del buró, las empresas no suscriptoras “gorronean” la reputación de penalización para los clientes no pagadores que adquieren las empresas suscriptoras.

¹⁰ Según ellos esto implica no solamente la participación de todas las empresas, sino también la tendencia al monopolio que parece presentarse en muchas experiencias prácticas en el mercado de burós de crédito. Cabe mencionar que al igual que Klein, el modelo de Pagano y Jappelli (1993) solo presenta un buró de crédito.

¹¹ Esto es lo que Klein llama “the Great Society” refiriéndose a su tamaño.

¹² Pagano y Jappelli (1993, p.17), afirman que “el incentivo para crear un buró es mayor en donde cada prestamista es confrontado por un gran número de clientes [potenciales] sobre los cuales no se tiene información previa, es decir, donde los prestatarios tienen gran movilidad”.

participar en el buró. En contraste, cuando por colusión o regulación no hay competencia antes del establecimiento del buró, los prestamistas están dispuestos a compartir información porque ello no representa una amenaza para sus rentas¹³. Cabe indicar que, la pérdida de rentas se relaciona con el tipo de información que se comparte; como se mostrará más adelante, cuando solamente se comparte información negativa las rentas informacionales no se ven amenazadas.

A pesar de la generación de competencia, compartir información puede resultar positivo para los bancos por razones adicionales a la mayor disciplina de los prestatarios. Padilla y Pagano (1997) indican que compartir información proporciona buenos incentivos a los deudores (adicionales al efecto disciplinario) porque la mayor competencia entre instituciones crediticias evita que los prestamistas obtengan ganancias extraordinarias; esto incentiva a los deudores a tener un buen desempeño pues no consideran que su esfuerzo está siendo apropiado por el banco¹⁴. Adicionalmente, la competencia entre las instituciones crediticias permite un abaratamiento y en algunos casos una expansión del crédito, lo cual redundará en beneficios para los prestatarios.

El intercambio de información que realizan las sociedades de información crediticia debe de efectuarse en el marco del respeto a la privacidad de los individuos; en muchos países existe una regulación específica que protege la privacidad de los consumidores. Este tipo de regulación elimina del intercambio, información que podría ser relevante¹⁵ y, en ocasiones, impone requisitos a las sociedades como la autorización explícita de los sujetos investigados. Estas restricciones, sin embargo, no deben de afectar el desempeño de las sociedades de información en lo fundamental.

La existencia de mecanismos para compartir información genera beneficios sociales y a nivel de grupos. Entre los beneficios sociales ya mencionados se encuentra la reducción de los problemas de información asimétrica que permite la baja en las tasas de interés activas y la expansión del crédito¹⁶ (Pagano y Jappelli, 1993); el abaratamiento del proceso de investigación para otorgar créditos; el mejor análisis del riesgo y la consecuente caída de la probabilidad de falta de pago; el efecto disciplinario sobre los deudores y el fomento de la competencia entre bancos; y la eliminación del subsidio cruzado que los buenos pagadores de hecho canalizan hacia los deudores de alto riesgo al tener que enfrentar tasas de interés mayores que las que les corresponden.

¹³ Según Pagano y Jappelli (1993), esto parcialmente explica el rápido desarrollo de las sociedades de información en Estados Unidos, en donde las restricciones a la apertura de sucursales bancarias en cada región (conocida como “branching regulation”), limitaron la competencia.

¹⁴ Según Padilla y Pagano (1999), al compartir información se eleva la competencia entre las empresas generadoras de información (los *principales*); dicha competencia favorece a los acreedores (los *agentes*), quienes tienen incentivos para realizar un mayor esfuerzo elevando con ello la probabilidad de pago. De esta forma, la mayor competencia puede beneficiar tanto a los agentes como a los principales.

¹⁵ Ver el caso de Australia en la sección internacional.

¹⁶ El mercado se expande solamente cuando el problema de selección adversa es grave por lo que los clientes de bajo riesgo quedan fuera del mercado. En contraste, el mercado puede reducirse cuando los bancos tienen poder monopólico pues la mejor identificación de los malos clientes puede contraer el crédito a los malos clientes en mayor medida que el aumento a los buenos clientes.

Evidentemente, tales beneficios no se distribuyen de manera uniforme sobre todos los individuos, pues los clientes de alto riesgo se ven afectados negativamente. Sin embargo, aquellos individuos que posean un buen historial y aquellos que participan por primera vez en el mercado resultan beneficiados. Por otra parte, el resultado sobre los prestamistas es ambiguo (Padilla y Pagano, 1997), porque al efecto disciplinario sobre los deudores y al mejor análisis de riesgo, se contrapone la mayor competencia entre los bancos.

Si se distingue entre tipos de crédito de acuerdo a su volumen, los beneficios de compartir información tampoco son distribuidos equilibradamente. El desarrollo de un sistema para compartir información reduce el costo de investigación de los clientes; esto hace rentables muchos créditos cuyo pequeño volumen no justifica una investigación directa del prestamista. De esta forma, los principales favorecidos son los créditos al consumo y a las pequeñas y medianas empresas. Las empresas grandes cuentan con otros mecanismos de financiamiento y de transmisión de información, como el mercado de valores, por lo que el desarrollo de los burós es menos relevante en este caso.

1.3. Acerca del funcionamiento de los burós de crédito

Los burós resuelven un problema de información asimétrica por medio de su actuación como un ente *neutral*¹⁷ que proporciona *referencias* acerca de las características de los prestatarios; tales referencias se basan en la experiencia que los agentes – sujetos y prestamistas - han tenido en transacciones pasadas. Para realizar esta función, los burós *recolectan, organizan y consolidan* información acerca de los receptores de crédito¹⁸ o prestatarios. La información *bruta o primaria*¹⁹ proviene de las instituciones que otorgan crédito²⁰, asociadas con el buró. Como contraparte, los burós proporcionan información consolidada sobre sujetos específicos a las instituciones asociadas. Puede decirse que los burós *crean* un mercado de información; en este mercado los prestamistas intercambian datos que fueron obtenidos a un cierto costo y sobre los que, por ende, tienen ciertos derechos. Es decir, en el buró se intercambia información *privada* de los sujetos que han recibido créditos en el pasado²¹; esa información se genera por la interacción de los consumidores y los prestamistas, por lo que puede considerarse que ambos tienen derechos

¹⁷ La neutralidad del mecanismo es indispensable para garantizar la participación de los acreedores; sin embargo, en ocasiones el carácter de ente neutral no se cumple.

¹⁸ Los agentes que reciben préstamos por parte de los usuarios del buró, se convierten en sujetos investigados cuando un usuario realiza una consulta sobre ellos.

¹⁹ Se denomina información bruta a aquella que generan y recogen las instituciones crediticias directamente de la interacción con sus clientes, que es la que recibe el buró. La información consolidada o procesada, es la que presentan los burós en sus reportes; es importante distinguir esta información de aquella que proporcionan las agencias calificadoras de riesgo. Los reportes de estas últimas, tienen un valor agregado más alto que los reportes de los burós pues realizan el análisis de riesgo; los burós de crédito no necesariamente cumplen con esa función.

²⁰ Las instituciones que otorgan crédito, como las tiendas departamentales y los bancos, se denominan *usuarios o clientes* de los burós.

²¹ Vale preguntarse si la información sobre un prestatario es propiedad de éste o de las agencias con las que el sujeto realizó transacciones. Estas agencias corrieron un riesgo original, al tratar con un sujeto sobre el que no poseían información, de ahí que tengan cierto derecho sobre esa información.

sobre ella. Sin embargo, la información que los bancos proporcionan al buró no es información pública²². En este trabajo se supone que los burós obtienen información de una manera *legal y justa*²³, y que los reportes se proporcionan respetando la ley correspondiente.

El mecanismo de adquisición y difusión de la información que sigue el buró es simple. En un momento determinado, los usuarios proporcionan a la SIC la información de todos los clientes a quienes les han otorgado créditos durante un cierto lapso. Tales datos identifican a los individuos de diversas maneras y detallan el comportamiento crediticio de los mismos en ese periodo. Los burós organizan y consolidan la información proveniente de diversas fuentes, recolectada durante múltiples periodos, construyendo así el historial crediticio de cada prestatario. De esta forma, cuando alguna institución crediticia o comercial asociada lo requiere, el buró le proporciona un reporte con el historial de un individuo.

Diagrama 1.1. Agentes y funcionamiento del Mercado de Información

El Diagrama 1.1 representa el flujo de información que ocurre en el sistema, suponiendo que solamente existe una SIC y que todos los prestamistas están suscritos a esa sociedad. Los sujetos establecen una relación con una o varias instituciones crediticias; en esa interacción se genera cierta información. Puesto que un mismo sujeto puede tener transacciones con más de un prestamista, al consolidar los datos provenientes de diversas fuentes, el buró conoce los adeudos totales del individuo en cuestión, así como su comportamiento crediticio pasado. El flujo de datos de los prestamistas al buró en un momento determinado, lleva información acerca de todos los clientes de ese prestamista. En contraste, los reportes de información del buró a los prestamistas, generados ante

²² La regulación de protección de datos de distintos países impone restricciones al flujo de información. En el caso de México, la tercera regla de las Reglas Generales a que deberán sujetarse las SICs, del 15 de febrero de 1995, reformadas el 1º de septiembre de 1997, establecen que se requiere la autorización escrita del sujeto investigado para poder obtener un reporte de las SICs. Ver sección 4.

²³ Existe un importante debate sobre el derecho que tienen los burós para proporcionar información privada. Es evidente que, desde una perspectiva de eficiencia, más información es mejor que menos y que es deseable que las agencias que otorgan crédito, cuenten con tanta información como esté disponible en el sistema; sin embargo, ello puede atentar contra el derecho a la privacidad que los sujetos investigados puedan tener. La solución de este conflicto depende de la legislación de protección de la información correspondiente.

solicitudes explícitas, contienen el historial de una persona o empresa específica²⁴. En el Diagrama 1.1, las líneas delgadas representan información primaria; mientras que las líneas gruesas representan información consolidada o procesada.

Como se mencionó previamente, en el caso en que no existiera una SIC, sería poco probable que las instituciones prestamistas intercambiaron información entre sí, porque se presentaría un problema de riesgo moral; es decir, cada institución crediticia tendría incentivos para reportar información incompleta o equivocada a sus competidores²⁵. Aunque este argumento pierde validez cuando la interacción es repetida, se mantiene el problema de neutralidad de los agentes en acuerdos bilaterales. La existencia del buró resuelve este problema porque tiene capacidad para penalizar a aquellas instituciones que no entreguen la información completa, veraz y oportunamente (Padilla y Jappelli, 1997)²⁶. Adicionalmente, aún si hubiera posibilidad de acuerdos para intercambiar información directamente entre las distintas instituciones crediticias, resulta más eficiente que las instituciones asociadas proporcionen sus respectivas bases de datos a un buró de crédito para aprovechar las economías de red de la industria²⁷. En términos prácticos, el número de acuerdos bilaterales que se requieren cuando existe un número considerable de prestatarios, hace inviables los arreglos directos.

En general, la relación que establece la SIC con sus asociados se basa en el *principio de reciprocidad*; es decir, solamente pueden consultar la información del buró aquellos generadores de información primaria que proporcionen tales datos al buró²⁸. De hecho los prestamistas pueden estar suscritos a varios burós, pues ello puede proporcionarles acceso a información más amplia y diversa. La decisión de participar en más de un buró tiene que ver con el mecanismo de pago por las consultas; en muchos casos, los asociados pagan una aportación anual más una cuota por consulta²⁹; en otros casos no se paga suscripción y solamente se cobra por consulta³⁰. En cuanto al aspecto práctico de las

²⁴ En muchos países existen diversos tipos de reportes que destacan distinta información. Hay reportes de crédito al consumo, hipotecarios, para empleo, arrendamiento, etc.

²⁵ En el caso de México, existe una restricción legal para compartir información entre instituciones de crédito como resultado del mantenimiento del secreto bancario, establecida en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Además, solamente las instituciones autorizadas como SIC pueden tener acceso a esa información (artículo 33 de la misma Ley).

²⁶ La capacidad de penalización del buró es una condición necesaria para su buen funcionamiento. La penalización en general ocurre por medio de la suspensión –temporal o permanente– del servicio de consultas. Alternativamente, el buró puede otorgar descuentos en precios a aquellos socios que proporcionen la información veraz y oportunamente, como ocurre en México.

²⁷ Las economías de red provienen de la existencia de externalidades positivas. El principio de la externalidad es que el valor de la suscripción a la red es más alto mientras mayor sea el número de suscriptores a la misma. Puesto que la información que los diversos otorgantes de crédito poseen es complementaria, este tipo de externalidades se presenta en la formación de bases de datos.

²⁸ En el caso de México, el principio de reciprocidad forma parte de la regulación. En otros casos, como el de los Estados Unidos, los usuarios pueden consultar información de un buró con el que no están asociados, pero a un precio más alto; evidentemente ello depende de que exista más de un buró en el mercado. Cabe aclarar que la reciprocidad se extiende a determinados arreglos en los que algunos prestamistas proporcionan al buró solamente información negativa, por lo que únicamente consultan información negativa, aún cuando existan otras empresas que proporcionen y consulten información positiva y negativa.

²⁹ Típicamente, la cuota depende por un lado, del tamaño de la base de datos bruta que el usuario haya proporcionado al buró, y por otro, del número de consultas que tal usuario efectúe.

³⁰ Este es el caso de México tanto en Senicreb, como en el Buró de Crédito.

consultas, en la actualidad tanto el flujo de información de los prestatarios al buró, como la entrega de los reportes, se realiza a través de medios electrónicos lo cual reduce el tiempo de procesamiento de la información³¹.

1.4. Acerca de la información que se comparte

Hasta el momento se ha mantenido el supuesto de que al compartir información, los asociados entregan al buró toda la información relevante; sin embargo, es necesario definir con precisión las características de la información que se comparte. La información que se intercambia puede ser *positiva* o *negativa*; esta última se refiere a información de *cartera vencida* o *fraudulenta*, mientras que la primera incluye datos sobre activos y deudas vigentes, garantías, patrones de repago, información laboral y otras características del sujeto investigado. Cabe señalar que compartir información estrictamente negativa resuelve el problema de selección adversa, siempre que las bases de datos sean completas, y aminora el problema de riesgo moral; compartir información positiva, por su parte, contribuye a resolver el problema de riesgo moral y permite un análisis de riesgo más preciso. El tipo de información que se comparte depende de la regulación y de los usos de cada país³².

En lo que se refiere a los incentivos para los deudores, Padilla y Pagano (1999) indican que compartir información acerca de las características de los deudores (i.e., positiva) puede tener un efecto no deseado. Revelar únicamente información negativa impone a los deudores una fuerte disciplina de pago porque les preocupa ser reportados como de alto riesgo; en este caso, la falta de pago del deudor es la única señal de mala calidad que reciben los otros prestamistas. En contraste, cuando también se reporta información positiva (como ingreso, otros pagos vigentes, etc.) la decisión de crédito depende no solamente de la falta de pago sino también de otros elementos; esto reduce los incentivos de los deudores para pagar pues saben que el prestamista toma en cuenta otras elementos para otorgar el crédito y no solamente el historial de pago.

Es importante indicar el efecto que tiene compartir información negativa y positiva sobre la competencia entre prestamistas. Las instituciones crediticias en general están dispuestas a compartir información negativa porque no afecta las rentas informacionales que obtienen de los buenos clientes que ya han identificado, la cual puede perderse al compartir información positiva. De ahí que algunas regulaciones limiten el intercambio a información negativa. A pesar de esto, el enfoque de *relación crediticia* plantea que compartir información positiva no representa una amenaza para la posición de los prestamistas pues al existir una relación entre un prestatario y un acreedor, el flujo de información entre ellos no se limita a préstamos y adeudos³³. De este modo, aún cuando los acreedores proporcionan al buró información positiva, no sacrifican su ventaja sobre los clientes que ya han identificado.

³¹ En el caso del Buró de Crédito en México, alrededor del 80% de las consultas se realiza por computadora. En Senicreb el 100% de las consultas es computarizada.

³² Ver la sección sobre el contexto internacional y el anexo 1.

³³ Ver Nakamura, 1993 entre otras referencias.

1.5. Acerca de la concentración en el mercado de burós de crédito

La estructura de mercado y la competencia a nivel de las sociedades de información crediticia ha recibido poca atención en la literatura económica; de hecho el funcionamiento del buró como empresa con un objetivo definido, ha quedado totalmente fuera de la discusión. Al respecto, Pagano y Jappelli (1993) afirman que “una vez que algunos bancos acuerdan intercambiar información, compartir información tiene rendimientos crecientes a escala: el buró de crédito es un monopolio natural”³⁴. El argumento se basa en la decisión de un usuario potencial que busca suscribirse a un buró, cuando existen varias alternativas. Suponiendo que las cuotas que los burós cobran son similares, que tienen el mismo tipo de especialización, y que los reportes de los burós son homogéneos, el usuario optará por aquel buró que tenga una base de datos más amplia pues los beneficios potenciales son proporcionales al tamaño de la base de datos³⁵. Del mismo modo, la externalidad positiva agregada que causa un nuevo suscriptor es mayor mientras mayor sea el número de suscriptores del buró en cuestión. Adicionalmente, el cambio tecnológico acentúa las economías de escala pues permite el manejo de grandes bases de datos en equipos de cómputo pequeños. Estos factores, aparentemente hacen óptima la concentración de las bases de datos³⁶.

Las economías de escala y de red antes descritas, sin embargo, no constituyen una condición suficiente para afirmar que la estructura industrial sea monopolística³⁷. Es necesario considerar, por un lado, que no existe un argumento de costos que justifique el monopolio; el costo fijo para establecer un buró de crédito, en términos de la capacidad de cómputo, es suficientemente bajo para constituirse en una barrera a la entrada³⁸. Por otro lado, el supuesto de que los reportes de los burós son productos homogéneos es cuestionable. La diferenciación de los reportes puede ocurrir no solamente porque los burós cuenten con bases de datos diferentes; aún con la misma base, los burós pueden tener una presentación diferente de la información. Ello sería suficiente para diferenciar los productos y justificar la existencia de más de un buró.

Además, existen otros factores que claramente se oponen a la existencia del monopolio natural. En primer lugar, desde la perspectiva de los suscriptores, el costo adicional en que incurren al proporcionar su base de datos a más de un buró es prácticamente cero³⁹. El argumento de que la existencia de más de un buró es factible se

³⁴ Pagano y Jappelli, 1993, p. 1694.

³⁵ Se supone que la base de datos del nuevo suscriptor del buró incluye información sobre algunos sujetos que no esté ya contenida en la base que el buró posee antes de asociarse con el nuevo prestamista.

³⁶ La evidencia internacional también muestra una tendencia a la concentración en pocos agentes; varios de los países analizados en este trabajo cuentan con estructuras de mercado oligopólicas.

³⁷ La existencia de economías de alcance no parece significativa. A pesar de que diferentes tipos de reportes pueden ser elaborados con distintos fines, el contenido básico de los reportes es muy similar.

³⁸ Los costos de seguridad pueden ser elevados pero no lo suficiente como para constituir una barrera a la entrada.

³⁹ Esto es así, en tanto los socios proporcionen a todos los burós el mismo formato de información.

fortalece porque frecuentemente los burós no cobran una cuota de suscripción, sino solamente una tarifa por consulta.

De esta forma, la tendencia a la concentración no necesariamente implica que no exista competencia en la industria, pues esta puede ocurrir entre pocos agentes con bases de datos amplias. Esta claro que la existencia de un monopolio natural en este mercado es una cuestión que requiere de mayor estudio; sin embargo, conviene indicar que la competencia aún entre pocos burós de crédito es deseable porque conduce a bases de datos más completas, a servicios más baratos, oportunos y veraces; y a una más rápida adopción de nuevas tecnologías⁴⁰.

1.6. Acerca de las diferencias entre burós y registros públicos de información crediticia

A pesar de las ventajas que compartir información crediticia genera, en muchos países las sociedades de información no han aparecido espontáneamente. En algunos de esos casos, las autoridades financieras han formado registros públicos de información crediticia (RPIC). Los RPIC funcionan de manera similar a los burós privados en lo que se refiere a recolectar información y proporcionar reportes a las instituciones asociadas; sin embargo, existen varias diferencias entre estas instituciones. La diferencia más importante, es que los burós de crédito surgen del *intercambio voluntario* de información entre prestamistas; en contraste, los prestamistas son *obligados* por las autoridades financieras a reportar su información al RPIC. Debe destacarse que la participación forzosa en el mecanismo puede proporcionar incentivos negativos a los socios del RPIC, lo cual puede ocasionar retrasos e imprecisiones en la información reportada⁴¹.

Otra diferencia es que la cobertura del RPIC suele provenir estrictamente de instituciones financieras, mientras que los burós privados reúnen datos de otras fuentes. El RPIC solamente reúne información de aquellas instituciones sobre las que las autoridades financieras tienen jurisdicción. Además, los RPIC suelen recoger datos únicamente de clientes con deudas superiores a un cierto límite⁴², lo cual deja fuera de la base de datos a una buena parte de los créditos al consumo⁴³. En contraste, los burós pueden tener cobertura universal pues pueden asociarse con todo tipo de instituciones crediticias y recabar datos sobre todos los montos de crédito.

⁴⁰ El regulador debe supervisar que la competencia a nivel de los burós de crédito no propicie que estas empresas reduzcan costos a través de relajar las medidas de seguridad y de protección de la información.

⁴¹ Por ejemplo, en el caso del RPIC en México, es común que los asociados se retrasen en transmitir su información al registro.

⁴² Ver los casos de México, Italia y Francia en la sección de experiencia internacional.

⁴³ El registro público en México solamente reúne información de deudores por montos superiores a los 200 mil pesos por lo que principalmente incluye información de empresas o personas físicas con actividad empresarial. Los créditos por debajo de ese límite se incluyen agregados por sector económico para fines estadísticos, pero no de manera individual. De esta forma, muchos de los créditos al consumo y algunos créditos a empresas que son inferiores al límite no forman parte de la base de consultas.

Como se ha mencionado, en general los RPIC son introducidos al mercado porque no existen burós privados⁴⁴; sin embargo, la experiencia reciente de muchos países que cuentan ya con un RPIC, muestra la creciente entrada de burós privados. Esto plantea dos interrogantes relacionadas. La primera se refiere al carácter temporal o permanente del RPIC y la segunda a la competencia potencial entre el RPIC y los burós privados. Según Jappelli y Pagano (1999), el RPIC resuelve un problema de inicio en esta industria; cuando el RPIC cumple con su función de manera apropiada, el establecimiento forzoso del mercado de información genera una mayor profundidad del mercado de crédito. En consecuencia, las necesidades de información del sistema se expanden a ciertas áreas no cubiertas por el RPIC, haciendo necesaria la entrada de burós de crédito privados. Los burós privados, en principio, se desarrollan en los múltiples nichos que los RPIC no cubren. En un momento dado las sociedades de información crediticia privadas estarían capacitadas para cubrir las funciones del RPIC, por lo que según este planteamiento, el RPIC sería transitorio. En el caso en el que el RPIC no cumpla cabalmente con sus funciones, dadas las restricciones que enfrenta tanto de tipo de información como de monto de los créditos, su carácter transitorio se hace aún más evidente.

La falta de viabilidad de la permanencia del RPIC se confirma al considerar que la participación en este sistema es obligatoria. En el origen del RPIC, los agentes pueden no darse cuenta de los beneficios de compartir información; sin embargo, una vez que el sistema está funcionando, sus virtudes deben ser evidentes para los asociados, por lo que la participación obligatoria no debe ser necesaria en el largo plazo.

A pesar de ello, en ciertas situaciones se justifica la permanencia del RPIC. En primer lugar, el RPIC puede sostenerse en el largo plazo en aquellos países en que el sistema crediticio se mantiene con un nivel de desarrollo tan bajo que se limita a las instituciones financieras. En segundo lugar, cuando los burós de crédito privados funcionan pero se establecen acuerdos de exclusividad entre algunos agentes y un buró, el RPIC puede ser utilizado como instrumento regulatorio para promover la competencia⁴⁵.

En cuanto a la competencia entre el RPIC y los burós de participación voluntaria, Jappelli y Pagano (1999) plantean que los servicios que prestan son *sustitutos*, lo que implica que las instituciones son excluyentes. Aunque ya se ha intentado establecer el carácter temporal del RPIC, es necesario averiguar si los dos mecanismos para compartir información compiten durante el tiempo en el que coexisten. Hay algunos ejemplos de la convivencia entre estos mecanismos en donde no se aprecia competencia efectiva⁴⁶; en estos casos, ambos mecanismos satisfacen diferentes segmentos del mercado por lo que sus funciones aparentan ser *complementarias*.

Cuando los burós privados están suficientemente desarrollados, la competencia con el RPIC se limita al segmento de información que ambas cubren, es decir, a los créditos grandes del sistema financiero. En este segmento, la competencia puede considerarse como

⁴⁴ Argentina es un caso excepcional en ese sentido, pues a pesar de contar con burós de crédito privado, el banco central inició un RPIC en 1991.

⁴⁵ El caso de Chile ilustra esta situación.

⁴⁶ Los casos de Italia, España e incluso México son ejemplos de esta situación.

desigual porque las empresas financieras están obligadas a proporcionar información al RPIC mientras que la participación en un buró privado es voluntaria⁴⁷. Sin embargo, el área de créditos a empresas grandes no es la que proporciona mayor mercado a los burós privados⁴⁸, cuya principal fuente de consultas son los créditos al consumo, a la vivienda y para la obtención de tarjetas de crédito. De este modo, más que una situación de competencia, lo que parece ocurrir es que la limitada cobertura del RPIC abre nichos de mercado a los burós privados, en los cuales pueden desarrollarse sin competir con el RPIC. En cualquier caso, está claro que la función del RPIC no es competir - por limitado que esto sea - con los burós privados. Así, una vez que el problema de inicio se ha resuelto y que las sociedades privadas de información crediticia se encuentran suficientemente desarrolladas, la autoridad financiera debe evaluar la conveniencia de mantener al RPIC en el mercado.

⁴⁷ Destaca que en algunos casos en que el buró se forma como un acuerdo colusivo entre algún grupo de prestamistas, la participación voluntaria es dudosa; en general, en acuerdos colusivos la participación se garantiza por medio de mecanismos coercitivos exógenos.

⁴⁸ Esto se puede apreciar en el caso de México, en la sección correspondiente.

2. La experiencia internacional.

2.1. Introducción

El objetivo de esta sección es presentar la experiencia de 10 países, incluyendo a México, en el desarrollo de mecanismos para compartir información crediticia; se intenta también mostrar la relevancia del crédito en dichos países, para vincularla al nivel de adelanto de los sistemas para compartir información. Es sabido que el origen y funcionamiento de las instituciones para intercambiar información crediticia en distintos países es heterogéneo. En algunos países las SICs han tenido un origen espontáneo y privado, mientras que en otros casos, las autoridades financieras han creado un registro público de información crediticia de participación obligatoria. Del mismo modo, la información manejada por las SICs en ciertos países es únicamente de cartera vencida y fraudulenta, mientras que en otros casos también se intercambia información positiva.

Esta comparación permite obtener varios resultados interesantes; en primer lugar, parece existir una correspondencia entre un mayor desarrollo del sistema financiero y una mayor profundidad de los mecanismos para compartir información. Esta observación no necesariamente revela una relación causal; solamente indica que la evolución del sistema de crédito y del mercado de información es paralela. En segundo lugar, los países en que el origen del (los) buró(s) fue espontáneo, privado, de participación voluntaria y tiene ya varias décadas desde su establecimiento, parecen contar con mayor cobertura informativa que los países en donde existe un registro público de información crediticia⁴⁹. En tercer lugar, existe una marcada tendencia hacia la concentración en los mercados de información crediticia. Finalmente, en los países de la muestra considerada en que existe un registro público, se ha producido la entrada al mercado de instituciones privadas; esto parece relacionarse con el hecho de que la formación del buró público es un mecanismo para resolver el problema de inicio o *start-up*.

2.2. La muestra de países

Para comparar el desempeño de los mecanismos para compartir información crediticia, es necesario desarrollar indicadores que reflejen la importancia del crédito en los países que componen la muestra; esta comparación revela la limitada importancia del crédito en México. El primer indicador de relevancia del crédito utilizado es el *financiamiento directo*; en el caso mexicano, este indicador excluye la cartera cedida al Fobaproa, y otros programas de apoyo similares. En el Cuadro 2.1 se presentan los datos de crédito directo como proporción del PIB para los 10 países que componen la muestra⁵⁰; es claro que el crédito al sector privado en México es reducido en relación al de los demás países. De hecho, los datos para 1997 revelan que el crédito bancario al sector privado en

⁴⁹ Es importante mencionar que Jappelli y Pagano, 1999, para una muestra de países mucho más amplia, encuentran que no hay una diferencia significativa en el desarrollo que el sistema de crédito alcanza bajo un mecanismo privado y un esquema público. Sin embargo, este no es el caso en la muestra aquí analizada.

⁵⁰ Las cifras para los países analizados provienen del rubro de crédito bancario al sector privado de las Estadísticas Financieras Internacionales, FMI; por cuestiones de cálculo, para el caso mexicano hay una diferencia no significativa entre este dato y el de financiamiento directo proveniente de la Gráfica 2.2.

México representa una proporción reducida del PIB, aún si se le compara con economías de desarrollo similar como Chile y Argentina. La diferencia es mucho más dramática con respecto a países desarrollados como Japón y el Reino Unido. El Cuadro también refleja que, ni aún en la etapa de expansión crediticia que se registró en México en la primera mitad de los noventa, el crédito directo alcanzó un nivel cercano al de los demás países de la muestra. Finalmente, la tendencia del crédito en México en el periodo que se presenta en el Cuadro 2.1, es hacia reducir su importancia, no hacia revertir la tendencia decreciente.

Cuadro 2.1 Crédito Bancario Directo al Sector Privado como porcentaje del PIB

País	Argentina	Australia	Chile	España	EEUU	Francia	Italia	Japón	México	Reino Unido
1994	20.3	69.0	52.1	77.7	93.4	88.0	59.5	208.5	38.7	110.3
1997	21.9	77.8	63.0	84.2	118.5	82.9	56.9	200.8	20.4	121.1
1999	25.0	87.2	67.5	92.5*	141.7	n.a.	59.2*	n.a.	16.2	122.9

*Los datos corresponden a 1998.

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales del FMI.

El Cuadro 2.2 contiene indicadores de la profundidad del mercado de crédito y de la información crediticia, así como información del origen y las características de los burós de crédito⁵¹ en los países que conforman la muestra. La profundidad del mercado de crédito está medida como el crédito bancario al consumo como proporción del consumo privado; la profundidad del mercado de información, por su parte, se mide como el número de reportes per cápita. En general, puede afirmarse que en aquellos casos en que su surgimiento es espontáneo, los burós se inician como agrupaciones regionales o especializadas que comparten información comercial⁵². En los Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón y Argentina, las SICs tuvieron un origen espontáneo y en todos los casos, se iniciaron al menos hace cuatro décadas; estos países, excepto Argentina, son los que tienen el más elevado crédito bancario al consumo como proporción del crédito total y la mayor profundidad de información crediticia. En contraste, los países en que los burós fueron iniciados por las autoridades financieras, como Francia, España, Italia y México, son los que tienen menor crédito al consumo y menor profundidad de información. Es necesario señalar que esto no indica una causalidad de contar con un registro público de información crediticia hacia menor profundidad crediticia o viceversa; se trata más bien de una regularidad empírica de la muestra analizada.

⁵¹ Ver Anexo 2 para mayores detalles de la muestra analizada.

⁵² Frecuentemente las agencias de información se formaron como asociaciones civiles sin fines de lucro.

Cuadro 2.2 Comparación Internacional de la Estructura del Mercado de Agencias de Información

País	Origen	Tipo de Información	Estructura de Mercado	Crédito bancario al Consumo. % del Consumo privado	Número de reportes anuales per cápita
Estados Unidos	Espontáneo, desde 1841 ^A .	(+) y (-)	Oligopolio a nivel nacional con múltiples burós regionales.	8.76 ^B	1.91 ^C
Reino Unido	Espontáneo, desde 1960.	(+) y (-)	Duopolio a nivel nacional.	16.90 ^D	1.05 ^E
Japón	Espontáneo, desde 1960.	Los burós especializados procesan información (+) y (-). Sólo comparten información (-).	Hay tres burós especializados que comparten información entre sí actuando como una sola agencia y existe otra agencia independiente. Es un duopolio a nivel nacional.	16.5 ^F	2.19 ^G
Australia	Espontáneo, desde 1930.	(-)	Duopolio a nivel nacional y un buró regional en Tasmania.	17.50 ^H	0.69 ^I
Argentina	Espontáneo a nivel regional, desde 1930. Buró Público desde 1996.	(+) y (-)	Oligopolio a nivel nacional, aunque existen más de 110 agencias regionales.	7.49 ^J	0.04 ^K
España	Buró Público, desde 1983.	(-)	Un buró privado dominante, además de la agencia del Banco Central.	5.23 ^L	0.02 ^M
Italia	Buró público, desde 1964.	(-)	Duopolio	2.7 ^N	0.07 ^O
Francia	Buró público, desde 1990.	(-)	Sólo existe el buró público.	7.33 ^P	0.09 ^Q
México	Buró público, los antecedentes datan desde 1930, pero el sistema actual inició en 1964.	(+) y (-). Las SICs sólo comparten información negativa entre sí.	SIC privada dominante, además de la agencia pública.	1.37 ^R	0.05 ^S
Chile	Buró público, desde 1987.	(+) y (-)	Duopolio comercial y un buró para personas, además del registro público.	10.04 ^T	0.49 ^U

Fuentes: Actualización y extensión del cuadro de Pagano y Jappelli, 1993, página 1708.

^A Madisson (1973).

^B Según el Federal Reserve Board (FRB) el crédito de los bancos comerciales al consumo en 1998 fue de 508.9 miles de millones de dólares, http://www.bog.frb.fed.us/releases/g19/hist/cc_hist_cb.html, mientras que según cifras del IFS (International Financial Statistics) el consumo privado fue de 5,807.9 miles de millones de dólares. Es importante mencionar que el crédito de todo el sistema financiero al consumo para ese mismo año fue de 1300.5 miles de millones de dólares, es decir el 22.4% del consumo privado.

^C Según una nota de marzo de 1998, de la ACB (Associated Credit Bureaus), "ACB Facts in Response to US PIRG Proposed Announcements" más de 2 millones de reportes se entregan por día hábil en los Estados Unidos, <http://www.acb-credit.com>.

^D La Oficina Nacional de Estadística de Inglaterra, reporta que según datos del Banco Central de ese país, los bancos privados otorgaron crédito al consumo por 87.4 miles de millones de libras en 1997, <http://www.statistics.gov.uk/statbase/xdataset.asp>. El consumo privado para ese año fue de 517 miles de millones de libras, según el IFS.

^E Jappelli y Pagano (1999), Tabla 1. Este dato se refiere al número de reportes per cápita en 1989.

^F Jappelli y Pagano (1993).

^G Según un informe de la ACB, "Consumer Credit Reporting Agencies in Japan" se produjeron alrededor de 27.91 millones de reportes anualmente en 1998, <http://acb.cyberserv.com/qs/Qspage.cfm?pageid=22>.

^H En el Boletín del Banco de la Reserva de Australia de junio de 1999, en el artículo "Consumer Credit and Household Finances" se reporta que el crédito al consumo para 1998 fue de 60 miles de millones de dólares australianos; http://www.rba.gov.au/bulletin/bu_ind.html. El consumo privado según el IFS, fue de 342.77 miles de millones de dólares australianos para 1998.

^I Según datos de CRL (Credit Reference Limited) una agencia de información privada australiana, se procesan 50,000 consultas al día, pero hay que tomar en cuenta que esta agencia sólo representa el 80% del mercado de información australiano, <http://www.credref.com.au>.

^J En el Boletín estadístico del banco Central de la República Argentina, para 1998 el crédito otorgado por los bancos privados y cajas de ahorro a las familias fue de 15,796 millones de pesos argentinos. El consumo privado asciende a 210,857 millones de pesos argentinos según el IFS.

^K Jappelli y Pagano (1999), Tabla 1. Este dato se refiere al número de reportes per cápita en 1997.

^L El crédito al consumo por parte de los bancos, según las estadísticas del Banco Central de España, fue de 2,672.8 miles de millones de pesetas en 1998, <http://www.dbc.es/infoest/ie0810.txt>. Mientras que el consumo privado, según el IFS, fue de 51,115.6 miles de millones de pesetas.

^M Según Jappelli y Pagano (1999), Tabla 2, los reportes que realizó el registro público durante 1997, fueron aproximadamente 758,000 anuales. A esta cifra hay que agregar los reportes que realizan las agencias de información privadas.

^N Jappelli y Pagano (1993).

^O Según Jappelli y Pagano (1999), Tabla 2, los reportes que realizó el registro público durante 1994, fueron aproximadamente 1.4 millones anuales. Mientras que, de acuerdo a la Tabla 1, los reportes que realizaron las agencias de información privadas durante 1996, fueron alrededor de 2.6 millones.

^P Según el Reporte Anual de 1998 del Banco Central de Francia, el crédito al consumo otorgado por los bancos alcanzó los 341.7 miles de millones de francos para 1998. El consumo privado representó 4,658.7 miles de millones de francos de acuerdo con el IFS.

^Q Según Jappelli y Pagano (1999), Tabla 2, los reportes que realizó el registro público durante 1990, fueron aproximadamente 5.4 millones al año.

^R De acuerdo a las cifras reportadas por el Banco de México, el crédito bancario al consumo para 1998, alcanzó 33,714 millones de pesos. En tanto el consumo privado para ese año fue de 2,585,196.25 millones de pesos, según cifras del INEGI.

^S Basándose en la información enero junio de 2000, se estima que el Buró de Crédito captará alrededor de 5.05 millones de consultas anuales de personas físicas y 153,600 de personas morales, mientras que el registro público (Senicreb) realizará 3,372 consultas este año. La población total según resultados preliminares del Censo de Población 2000 de INEGI es de 97,361,711 habitantes.

^T Según un estudio del Banco Central de la República de Chile, "Evolución de la Banca en el Segundo Trimestre de 1999", el crédito al consumo por parte de la banca fue de 2,241.9 miles de millones de pesos chilenos. El consumo privado, por su parte fue de 22,311.7 de pesos chilenos.

^U Jappelli y Pagano (1999), Tabla 1. Este dato se refiere al número de reportes per cápita en 1997 de los burós privados. El registro público transfiere la información que procesa, a un buró privado.

En el Cuadro 2.2 se aprecia que Estados Unidos es el país con mayor tradición en compartir información⁵³. En dicho país los burós se originaron de manera espontánea, aproximadamente en 1841, como agencias de investigación de crédito mercantil; aunque las instituciones pioneras⁵⁴ se iniciaron en una cierta región, Madison (1993) indica que se propusieron cubrir todo el territorio de la Unión⁵⁵. Conforme ocurrió el desarrollo del mercado crediticio, el número de burós se multiplicó; de este modo, para 1955 había alrededor de 1700 burós⁵⁶, la mayoría con alcance regional o especializados en alguna actividad. Como en otros países en los que los burós cuentan ya con una larga tradición, recientemente se ha producido una marcada tendencia hacia la concentración; esto ha dado lugar a la formación de 3 burós nacionales⁵⁷ y a la paralela reducción en el número de burós regionales a 600 en 1998 y a 450 en 1999⁵⁸. Cabe mencionar que los tres burós nacionales, siguiendo a Klein (1993), son alimentados con información proveniente de muchos burós regionales. Así, si el análisis se limita al mercado nacional, se encuentra una estructura oligopólica, con una fuerte tendencia a la concentración. Estados Unidos es uno de los países con cobertura de información crediticia más completa; las agencias de información proporcionan más de 2 millones de reportes por día, los cuales incluyen tanto información positiva como negativa⁵⁹.

En el Reino Unido y en Australia el crédito al consumo también cuenta con una elevada penetración; en ambos países la historia de los burós privados es larga y la cobertura de información es amplia a juzgar por el número de reportes per cápita. En el caso australiano, sin embargo, solamente se reporta información negativa dadas las restricciones que impone la ley de protección a la privacidad. Ambos países registran la tendencia a la concentración que revela el caso de los Estados Unidos, la cual sin duda está relacionada con un fenómeno tecnológico. En Australia, hace 30 años existían 30 burós mientras que en el Reino Unido a principios de los años noventa había 4 (Pagano y Jappelli, 1993); en la actualidad solamente hay 2 burós en cada país.

Al igual que en los casos mencionados, en Japón el mercado de crédito y la difusión de la información tienen una gran profundidad; adicionalmente, los burós privados tienen un origen espontáneo y cuentan ya con una historia considerablemente extensa. A pesar de ello, el caso Japonés es peculiar. Desde los años setenta se conformaron 3 agencias de información especializadas que manejan información positiva y negativa; la primera concentra información de los bancos; la segunda información de empresas que proveen financiamiento a los consumidores; y la tercera, información proveniente de empresas comerciales que venden a crédito. Cada generador de información proporciona sus datos a

⁵³ Según la ACB, el primer mecanismo para compartir información fue establecido por los sastres de Londres en 1802 para evitar que los clientes que no le pagaban a un sastre, hicieran lo mismo con los demás.

⁵⁴ Madison (1973) señala que en 1841 Dunn y en 1848 Bradstreet iniciaron operaciones en Estados Unidos.

⁵⁵ A este respecto, Madison (1973) de alguna manera contradice a Pagano y Jappelli (1993); estos últimos afirman que los primeros burós americanos tenían un carácter y un objetivo regional. Siguiendo a Madison, los burós fueron locales por razones transitorias pero la intención de los fundadores, era que las instituciones cubrieran todo el país.

⁵⁶ Pagano y Jappelli (1993).

⁵⁷ Trans Union, Experian (antes TRW) y Equifax.

⁵⁸ Associated Credit Bureaus (1998), homepage.

⁵⁹ Además de la información crediticia, en EEUU los burós concentran y proporcionan información laboral y personal, lo que ha hecho de los burós instituciones sumamente versátiles

una sola de estas tres agencias especializadas. Recientemente, las tres agencias decidieron compartir su información negativa a través de una red común. Además de estas tres agencias, existe un buró universal que recoge información nacional; sin embargo, el mercado de información está dominado por las tres agencias especializadas mencionadas.

Entre el grupo de países en que los burós tienen un origen espontáneo y privado, la experiencia argentina es también muy particular. Desde hace más de 40 años surgieron agencias de información crediticia regionales sin fines de lucro, llamadas Institutos de Informaciones Crediticias (IICs), organizadas en torno a las cámaras de comercio locales. A la fecha existen más de 110 IICs, los cuales además de información comercial, en ocasiones cuentan con la participación de las oficinas bancarias de la localidad. Además de estas instituciones regionales, existen burós privados de información a nivel nacional desde hace varias décadas. A pesar de contar con estas instituciones, en 1991 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició un servicio para revelar información de grandes deudores. Posteriormente, la base de datos se expandió de manera significativa cuando se formó la Central de Deudores del Sistema Financiero que presta el servicio actualmente. La base de datos existente incluye información de todos los usuarios del sistema financiero y del no financiero que emitan tarjetas de crédito a deudores que posean deudas mayores que 50 dólares. Esto conforma una base de datos inusualmente amplia para un RPIC. La entrada del sector público a un área donde el sector privado ya tenía un cierto nivel de desarrollo puede resultar cuestionable; sin embargo, el BCRA consideró que las organizaciones existentes no tenían la profundidad deseable. Además, las autoridades han señalado que el registro público de información crediticia solamente proporciona datos sin elaboración en el análisis de riesgo, por lo que el sector privado puede concentrarse en este análisis, así como en obtener información de otras fuentes⁶⁰.

Aquellos países en que los burós no han emergido espontáneamente del sector privado, se puede considerar que se encuentran estancados en el mal equilibrio que describe Klein (1992), en el que nadie quiere compartir información. En este caso, las autoridades financieras tienen incentivos para intentar corregir el problema ya sea promoviendo la creación de burós de crédito o por medio de la creación directa de una oficina que lleve a cabo esa labor. Esta última ha sido la solución adoptada por muchos países, en los cuales una oficina del Banco Central proporciona el servicio de información crediticia (Jappelli y Pagano, 1999). En estos casos, las instituciones financieras que proporcionan crédito tienen la *obligación* de aportar información acerca de sus clientes al registro público de información crediticia⁶¹. Resulta relevante que precisamente aquellos países de la muestra cuyos mercados de crédito cuentan con menor profundidad, poseen un sistema en que, en primera instancia, una oficina pública presta el servicio de información.

Como se ha indicado, el RPIC enfrenta problemas de cobertura, incentivos y adopción de tecnología; estas restricciones pueden estar relacionadas con la falta de profundidad del mercado de crédito en los países en que el RPIC es predominante. En el Cuadro 2.2 se aprecia que los países en que existe un buró público no sólo tienen menor

⁶⁰ Banco Central de la República Argentina, 1997.

⁶¹ Es también importante mencionar que en cada país los datos requeridos por el registro público son diferentes; por ejemplo, en Argentina se exige reportar más información que en México.

profundidad crediticia sino también menor cobertura informativa. Además, exceptuando el caso de México en donde el registro público data de 1964⁶², el origen del RPIC es relativamente reciente. Sin embargo, es importante destacar que en España, Italia, Chile y México, las agencias de información crediticia privada participan de manera creciente en el mercado. Es probable que las funciones del RPIC hayan propiciado un desarrollo del mercado crediticio en general, de tal manera que la participación privada se haya hecho más atractiva. Es también factible que las instituciones privadas entrantes estén aprovechando los nichos que los RPIC dejan abiertos, como son la recolección de información de créditos no financieros y de créditos pequeños al consumo. Cualquiera que fuera la razón de la entrada de los burós privados en los países en que ya existe un RPIC, la competencia entre algunos de los servicios proporcionados por ambas instituciones es una posibilidad latente; sin embargo, en la medida en que los RPIC tengan un alcance limitado, la especialización entre las instituciones parece orientarse hacia un esquema de servicios complementarios⁶³.

Jappelli y Pagano (1999) han realizado un estudio para un gran número de países sobre el efecto que los mecanismos para compartir información tienen sobre la evolución del crédito. Los autores encuentran que en los países en que se comparte información, los préstamos bancarios son al menos dos veces más altos que en los que no se comparte, luego de corregir por el tamaño de las economías respectivas. Contrariamente a lo que refleja la muestra aquí presentada, Jappelli y Pagano (1999) indican que, en términos de la profundidad del mercado de crédito, la distinción entre burós privados y registro público de información no es significativa. De esta manera, siguiendo a Jappelli y Pagano (1999) puede inferirse que los burós privados y el RPIC son instituciones substitutas⁶⁴. El estudio plantea que el compartir información está significativamente correlacionado con una menor tasa de falta de pago de los créditos. Sin embargo, se aclara en el trabajo que aquellos países en que el crédito está más desarrollado, son también los que poseen una mejor definición de los derechos de los prestatarios, un sistema judicial confiable y un mayor respeto a la ley; estos factores podrían explicar tanto la menor tasa de falta de pago, cuanto la mayor profundidad del mercado de crédito, restando importancia a la información crediticia como factor explicativo.

En suma, la experiencia de la muestra de países indica que la retroalimentación entre el sistema crediticio y los mecanismos para compartir información redundan en una mayor profundidad tanto del mercado de crédito como de la información crediticia. El análisis aparentemente indica que los burós privados de participación voluntaria aventajan a los RPIC en términos de la profundidad informativa que alcanzan; sin embargo, la muestra estudiada también parece señalar que cuando los burós privados no surgen

⁶² Ver la sección 4.

⁶³ En el caso de Argentina, las empresas privadas se han quejado de competencia desleal por parte del RPIC, el cual ofrece sus servicios a bajo costo y de una forma muy abierta. Como se ha explicado antes, la competencia entre el RPIC y los burós privados es deseable solo en condiciones especiales.

⁶⁴ En un estudio anterior (Jappelli, 1997) encontró que había una aparente diferencia en el comportamiento de la cartera vencida en aquellos países que contaban con un buró de crédito privado y los que poseían un registro público de información crediticia; la correlación negativa en los primeros, era mucho más negativa que en los segundos. Ello, sin embargo, no se corroboró en el estudio econométrico de corte transversal más reciente (Jappelli y Pagano, 1999).

espontáneamente, el RPIC puede actuar como detonador e inducir la participación privada. De hecho, es posible que una vez resuelto el problema de *start up*, exista una complementariedad temporal entre las funciones del RPIC y las de los burós privados.

3. El crédito al consumo y a las pequeñas y medianas empresas en México.

3.1. Introducción

La experiencia internacional revela que existe una estrecha relación entre el desarrollo del mercado de crédito y la profundidad alcanzada por los mecanismos para compartir información, sean estos sociedades de información crediticia privadas o registros públicos⁶⁵. En el caso de México, tanto el crédito bancario al sector privado como los mecanismos de difusión de información presentan un desarrollo limitado, confirmando así la correlación mencionada. El objetivo de esta sección es presentar la evolución reciente de diversos indicadores del crédito en México, la cual ilustra lo limitado de su desarrollo; esto se relaciona en la sección siguiente con el pobre crecimiento de los mecanismos para compartir información. Se enfatiza la trayectoria del crédito al consumo, a la vivienda y a las pequeñas y medianas empresas, pues la existencia de un sistema de información crediticia consolidado es fundamental para el desarrollo de estos mercados.

3.2. Evolución del crédito bancario total

La evolución del crédito bancario total⁶⁶ como proporción del PIB⁶⁷, aparece en la Gráfica 3.1.⁶⁸ En los últimos 20 años el crédito bancario ha registrado dos etapas de expansión y dos profundas caídas. La expansión más reciente, de 1988 a 1995, elevó el crédito de poco más de 30% a casi 55% del PIB. Este desempeño se vincula con el proceso de liberalización financiera iniciado a fines de los años ochenta, que abarcó la privatización de los bancos, la eliminación del encaje legal y posteriormente del coeficiente de liquidez, la liberación de las tasas de interés, la entrada de capitales externos y la abolición de los créditos dirigidos. Finalmente, de 1995 a la fecha, el crédito total como proporción del PIB ha sufrido una drástica reducción, alcanzando niveles inferiores a los que tenía antes de la expansión.

⁶⁵ Ver sección 3.

⁶⁶ Se trata del crédito otorgado por la banca comercial y de desarrollo al sector privado y al gobierno, excluyendo el financiamiento al sector financiero y al externo.

⁶⁷ Es necesario destacar que en estos indicadores se presenta el *acervo* de crédito como proporción del *flujo* de producto; aunque no es correcto comparar acervos con flujos, el producto solamente se utiliza como medida para proporcionar una idea de la dimensión del crédito.

⁶⁸ Es importante señalar que existen múltiples fuentes de crédito; este estudio se limita a analizar el crédito bancario y, con menor profundidad, el crédito no bancario.

Gráfica 3.1. Crédito Bancario Total

Fuente: Banco de México

La Gráfica 3.2 presenta el financiamiento de la banca comercial al sector privado como proporción del PIB; se aprecia que dicho financiamiento se elevó de manera importante de 1988 a 1994, alcanzando más del 40% del PIB en este último año. Además de los factores que beneficiaron al crédito total, el crédito privado se vio favorecido por el ajuste fiscal llevado a cabo en ese periodo; la reducción del déficit público liberó recursos financieros que se orientaron hacia el sector privado. A partir de 1995, el crédito bancario al sector privado descendió considerablemente, aunque se mantuvo por arriba del nivel que tenía antes de la expansión. Sin embargo, los datos posteriores a 1994 resultan engañosos pues una alta proporción del financiamiento está conformado por las reestructuraciones en Udis y por la cartera cedida al Fobaproa. Para obtener una mejor indicación del financiamiento, se utiliza el *financiamiento directo* de la banca comercial al sector privado, el cual excluye las reestructuraciones en Udis, la cartera cedida al Fobaproa y los redescuentos, como proporción del PIB. Como se observa en la Gráfica, el financiamiento directo se contrajo después de 1994, hasta alcanzar en 1999 y 2000 niveles similares a los de la etapa previa a la expansión⁶⁹.

Gráfica 3.2. Financiamiento Bancario al Sector Privado: Total y Directo (como porcentaje del PIB)

Fuente: Banco de México.

⁶⁹ Nótese que hasta 1994 el financiamiento total y el directo eran bastante cercanos ya que la única diferencia entre ellos eran los redescuentos. Las cifras para 1999 de financiamiento directo son saldos a agosto, mientras que el dato de PIB es para el segundo trimestre.

La Gráfica 3.3 muestra el crédito bancario al consumo como proporción del PIB; la evolución del crédito al consumo es similar a la del crédito canalizado al sector privado; sin embargo se aprecia que la etapa de expansión del crédito al consumo se limitó al periodo 1988–1991, lapso mucho más breve que el correspondiente al crédito al sector privado. Aunque el crédito al consumo alcanzó en 1997 el nivel que tenía antes de la expansión crediticia, ha continuado cayendo. Todos estos indicadores indican que la expansión del crédito en México fue un fenómeno temporal; una de las razones para ello, es la limitada información con que se contaba, y en cierta medida aún se cuenta, para conceder un crédito.

Gráfica 3.3. Financiamiento Bancario al consumo (como porcentaje del PIB)

Fuente: Banco de México.

3.3. El crédito al consumo y a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Tanto las empresas, grandes y pequeñas, como los individuos requieren crédito. El papel que juegan los mecanismos para compartir información crediticia resulta particularmente relevante para el otorgamiento de crédito a pequeñas y medianas empresas (PYMES) y para el crédito al consumo. En general, el crédito al consumo y a los pequeños negocios se caracteriza por un gran número de solicitudes por montos pequeños que no justifican incurrir en el costo de una evaluación exhaustiva. El acceso a los reportes de las SICs reduce el costo de obtención de información básica sobre un solicitante, lo cual hace rentables muchos créditos pequeños⁷⁰. En lo que respecta a empresas grandes⁷¹, la información contenida en los reportes emitidos por las SICs constituye un elemento de menor importancia dentro de la información requerida para otorgar un crédito de monto elevado.

A continuación se presenta la evolución del crédito bancario al consumo y algunos indicadores sobre el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Se incluyen también algunos indicadores del crédito no bancario; este último tipo de crédito es particularmente relevante para las PYMES y para el consumo⁷².

⁷⁰ Puede pensarse que el costo promedio del proceso de investigación se reduce conforme aumenta el volumen del crédito solicitado.

⁷¹ Se supone que, en general, las empresas grandes piden préstamos de gran magnitud.

⁷² A pesar de esas limitaciones en información, en la sección 3.3.3 se realiza una breve estimación del crédito no bancario. Esta estimación no incluye datos de uniones de crédito, cajas de ahorro, cooperativas, etc. En el caso de las PYMES tampoco incluye el crédito de proveedores, que es muy relevante.

3.3.1. Crédito bancario al consumo

La proporción del consumo privado⁷³ que se financia con crédito de los bancos comerciales es un indicador importante de la actividad crediticia; tal proporción se presenta en la Gráfica 3.3. Como se aprecia, de 1979 a 1988, en la etapa previa a la expansión, los bancos financiaban menos del 2% del consumo total; la breve expansión del crédito al consumo alcanzó su punto máximo en 1991, cuando más de 6% del consumo privado se financió con crédito de la banca comercial. Sin embargo, a partir de 1992, esa razón se contrajo continuamente hasta regresar en 1996 al nivel previo a la expansión. La tendencia descendente se ha mantenido, por lo que en 1999 solamente el 1% del consumo privado se financió con crédito bancario.

La Gráfica 3.4 contiene también la proporción que el crédito de la banca comercial al consumo representó con respecto al crédito total de la banca al sector privado; en este caso la evolución es muy similar a la razón anterior: de 1979 a 1988 el crédito al consumo representó alrededor de 4% del crédito privado total; de 1989 a 1991, dicha proporción se elevó a más del 10% para caer a partir de 1992, hasta alcanzar los niveles previos a la expansión en 1996. Esta evolución deja claro, por un lado, que la expansión del crédito al consumo fue un fenómeno transitorio y, por otro, que el crédito bancario al consumo en la actualidad representa una proporción reducida del crédito privado total (2.6%)⁷⁴.

Gráfica 3.4. Crédito Bancario al Consumo como porcentaje del Consumo Privado y del Crédito Bancario al Sector Privado

Fuente: Banco de México y SCN de México.

Como se ha indicado, el crédito bancario al consumo cayó en términos reales aún durante la etapa de expansión del crédito total. Dos factores resultan fundamentales para explicar ese fenómeno. En primer lugar, el aumento del crédito bancario hacia otros destinos, puede haber generado un efecto desplazamiento o “*crowding out*” del crédito al consumo; este parece ser el caso del crédito a la vivienda que registró un importante incremento al tiempo que el crédito al consumo se mantenía estable. En la Gráfica 3.5 se aprecia que de 1979 a 1981, el monto de crédito bancario a la vivienda y al consumo era

⁷³ Los datos de consumo privado provienen del Sistema de Cuentas Nacionales.

⁷⁴ Estos indicadores de crédito al consumo solamente incluyen a las instituciones bancarias. Mas adelante se presenta el crédito no bancario al consumo.

similar; sin embargo, este último continuó elevándose luego de 1991, mientras que el segundo tendió a descender⁷⁵. En segundo lugar, en los años recientes se ha producido un importante desarrollo de instituciones no bancarias de financiamiento al consumo, las cuales han satisfecho parte de la demanda.

Gráfica 3.5. Crédito Bancario al Consumo y a la Vivienda

Fuente: Banco de México.

Al interior del crédito al consumo otorgado por el sistema bancario, la caída más profunda se registró en el rubro de tarjetas de crédito el cual descendió en un 88.3% en términos reales de 1994 a 1997, como muestra la Gráfica 3.6. Este descenso se relaciona con el tipo de consumo que las tarjetas financian, pues en general, se trata de bienes y servicios que no tienen garantía. Adicionalmente, el consumo con tarjeta frecuentemente se relaciona con servicios suntuarios que son ajustados a la baja con cierta facilidad. Por su parte, el crédito bancario para bienes de consumo duradero, que se canaliza de manera importante hacia la compra de automóviles, se mantuvo prácticamente constante aún en los años de expansión crediticia; este comportamiento se relaciona con la expansión de la oferta de crédito para la compra de autos que instituciones no bancarias realizaron desde antes de 1994, tales como las automotrices y los autofinanciamientos.

Gráfica 3.6. Crédito de la Banca al Consumo

Fuente Banco de México.

⁷⁵ Como se indicó, el incremento del crédito bancario a la vivienda durante 1995 y el elevado nivel en los años posteriores, refleja los proceso de refinanciamiento automático y de reestructuración de estos créditos.

3.3.2 Crédito bancario a las pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Según una encuesta de opinión empresarial realizada por el Banco de México para el primer trimestre del año 2000, alrededor del 66% de las empresas mexicanas no contaba con crédito bancario. En lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas, solamente el 24% de ellas declaró haber tenido acceso al crédito bancario⁷⁶. En contraste, más del 50% de las empresas grandes⁷⁷ recibió este tipo de crédito. De acuerdo con la misma encuesta, más del 30% de las empresas de cualquier tamaño que no utilizaron crédito, consideraron que el crédito bancario es demasiado caro; una proporción aún mayor de las empresas grandes consideró que el crédito de la banca mexicana era caro. Alrededor del 19% del total de empresas que conforman la muestra consideró que la banca no estaba dando crédito, mientras que aproximadamente 5% solicitó el crédito y fue rechazado. En el caso de las empresas pequeñas que no utilizaron crédito el 7% fue rechazado por la banca. Esta situación ilustra que las empresas mexicanas, en particular las pequeñas, tienen un limitado acceso al crédito.

Gráfica 3.7. Financiamiento por tamaño de empresa

Fuente: Encuesta del Banco de México.

3.3.3. Crédito no bancario⁷⁸

El financiamiento no bancario ha registrado un importante crecimiento en los últimos años, en particular el que se canaliza al consumo y a los créditos hipotecarios. Como se aprecia en el Cuadro 3.1, el financiamiento no bancario al sector privado se ha elevado, de 1994 a 1999, a una tasa promedio anual de 2.72% en términos reales. Esto se ha conjugado con la caída del financiamiento bancario al sector privado de casi 10% real en promedio anual en el mismo lapso. Como resultado, la estructura del financiamiento al sector privado ha cambiado de manera significativa; mientras en 1994 el sector no bancario proporcionaba alrededor de una cuarta parte del financiamiento total, para el primer trimestre del año 2000, el sector no bancario otorgaba más del 40% del crédito.

⁷⁶ Estas empresas tuvieron ventas de entre 1 y 100 millones de pesos en 1997.

⁷⁷ Empresas con ventas superiores a 501 millones de pesos en 1997.

⁷⁸ Se incluye el crédito otorgado por tiendas departamentales a través de sus propias tarjetas de crédito, SOFOLES, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje, instituciones de seguro y crédito de proveedores a 167 empresas que cotizan en bolsa.

Gráfica 3.8. Estructura del Financiamiento al Sector Privado

Fuente: Banco de México.

Esta evolución ha sido mucho más dramática en lo que se refiere al crédito al consumo privado. Como se ha señalado, el crédito bancario al consumo se redujo a una tasa real anual promedio de 21% en el periodo de 1994 a 1999. Sin embargo, el crédito no bancario al consumo se ha elevado en el mismo periodo, a una tasa promedio anual de más de 22% real. Esto ha alterado significativamente la estructura del financiamiento al consumo privado, ya que el financiamiento no bancario en 1994 era del 4% del total, mientras que para marzo de 2000 esa proporción se elevó a casi 38%.

El financiamiento a la vivienda registra un fenómeno similar, pues el sector no bancario pasó de representar menos del 2% del total en 1994 a 8.4% para marzo de 2000; en este caso destaca el gran dinamismo del financiamiento otorgado por las Sociedades de Financiamiento de Objeto Limitado (Sofoles) hipotecarias.

Cuadro 3.1. Estructura del Financiamiento al Consumo y la Vivienda

CONCEPTOS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	mzo 2000
(como porcentaje del financiamiento total)	5.57	3.65	2.88	3.17	2.85	3.39	3.28
CREDITO AL CONSUMO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Bancario (como porcentaje del crédito al consumo)	95.89	91.71	79.22	72.46	69.46	60.50	62.25
No Bancario (como porcentaje del crédito al consumo)	4.11	8.29	20.78	27.54	30.54	39.50	37.75
(como porcentaje del financiamiento total)	12.79	15.06	16.80	16.57	16.00	15.61	15.65
CREDITO A LA VIVIENDA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Bancario (como porcentaje del crédito a la vivienda)	98.14	98.88	97.49	96.83	94.98	92.20	91.63
No Bancario (como porcentaje del crédito a la vivienda)	1.86	1.12	2.51	3.17	5.02	7.80	8.37

Fuente: Elaborado con datos del Banco de México.

Estos datos proporcionan una idea de la importancia que han adquirido las instituciones de financiamiento no bancarias; de ahí la relevancia de que las SICs sean capaces de asociarse con este tipo de instituciones para alcanzar una cobertura más completa.

4. El caso de México

4.1. Introducción

La presencia de mecanismos para compartir información crediticia en México se remonta hasta 1934 cuando algunos bancos iniciaron un sistema para intercambiar información; al paso de los años este sistema se convirtió en el registro público de información crediticia que funciona en la actualidad, denominado Senicreb. Dada la regulación del sector financiero, el registro público resultó funcional por muchos años tanto como mecanismo de supervisión como en su función de fuente de consultas; esta regulación, basada en cajones de inversión, obligaba a las instituciones de crédito a canalizar una proporción de sus recursos a actividades específicas. El RPIC permitía a las autoridades financieras supervisar que los recursos crediticios se orientaran hacia los fines que la regulación establecía; de este modo, los bancos solamente tenían libertad para canalizar una proporción reducida de su captación hacia los créditos que deseaban. Simultáneamente, dada la restricción de la oferta, normalmente los créditos les eran otorgados a clientes conocidos, por lo que el RPIC satisfacía las necesidades de información.

Como parte del proceso de liberalización financiera, en 1989 el régimen de encaje legal fue sustituido por el de coeficientes de liquidez, y éste a su vez fue eliminado en 1991; adicionalmente, se eliminaron los criterios selectivos en las prácticas crediticias. Paralelamente, el ajuste de las finanzas públicas liberó un monto de recursos considerable del que ahora podían disponer los bancos para otorgar préstamos. De esta manera, las reformas aludidas dejaron en libertad a los bancos para canalizar un mayor volumen de crédito a los proyectos y personas que desearan; ello implicó que los bancos otorgaran préstamos a clientes con quienes no habían tratado anteriormente.

Sin embargo, las limitaciones en el crédito bancario dirigido al sector privado que resultaban de la regulación, no propiciaron la formación de instituciones de información y de las correspondientes bases de datos; por tanto, cuando se eliminaron las restricciones regulatorias, el sistema financiero carecía de instituciones que satisficieran esas necesidades de información. A principios de los noventa, además del Senicreb, existía una empresa privada –CICSA denominada posteriormente Datum- que concentraba información sobre usuarios de tarjetas de crédito, pero que también tenía una base de datos limitada. Esta falta de instituciones revela una vez más la asociación que existe entre el desarrollo de las sociedades de información y la profundidad del mercado de crédito.

Así, muchos de los créditos que los bancos otorgaron luego de la reforma fueron concedidos con poca información acerca de los clientes y de los proyectos, tanto por la falta de experiencia de los prestamistas, como por las limitaciones institucionales mencionadas. Con el fin de promover la entrada de sociedades de información crediticia privadas que permitieran resolver las carencias de información, las autoridades financieras emitieron una regulación específica entre 1993 y 1998.

En 1995, con la regulación aún en formación, varias empresas privadas fueron autorizadas para entrar al mercado de información crediticia. Dicha entrada ocurrió en una

etapa en la que el crédito bancario sufrió una severa contracción; a pesar de ello, una de estas empresas –el Buró de Crédito- ha creado una base de datos importante y ha extendido sus servicios rápidamente. La expansión de esta empresa se relaciona con varios factores. Por un lado, el Buró está cubriendo el profundo vacío de información existente en algunos segmentos del mercado de información; por otro, su vinculación con los bancos le ha permitido captar las consultas de este importante segmento del mercado, desplazando incluso al RPIC. Las otras SIC autorizadas no tuvieron éxito, por lo que abandonaron el mercado; esto ha convertido al Buró en la única SIC activa en la actualidad.

Los servicios del Buró en el segmento de personas físicas representan una mejora importante en los mecanismos de información, pues antes del funcionamiento del Buró esos datos prácticamente no recibían atención; en este caso, sin duda hoy se cuenta con mejor información que hace 5 años. En el segmento de información acerca de empresas no se ha registrado un progreso significativo en la industria en su conjunto. En términos de las perspectivas, en tanto el crédito no se recupere y se generen nuevos datos, es factible que la expansión reduzca su dinamismo conforme el vacío de información se llene.

En esta sección se efectúa una revisión de los antecedentes y de la situación actual del mercado de información crediticia mexicana. En la primera parte se comenta la evolución del registro de información pública. Posteriormente se describe la regulación de las SICs privadas y, finalmente, se presenta la situación del mercado en la actualidad.

4.2. El registro Público de Información Crediticia (Senicreb)

Desde los años treinta existen antecedentes de instituciones orientadas a compartir información crediticia en México. En efecto, la Asociación de Banqueros de México formó en 1930 el Departamento de Información de Créditos Duplicados que recibía de los bancos las listas alfabéticas de los deudores y los montos adeudados; el departamento consolidaba las deudas de clientes específicos e informaba a los propios bancos el monto total de las responsabilidades de los clientes, sin indicar con cuáles bancos tenían deudas. Las funciones de esta institución pasaron a manos del Departamento de Créditos Múltiples de Banco de México en 1933, dadas las necesidades tanto de estadística crediticia nacional como de consultas específicas por parte de las instituciones de crédito⁷⁹. Este departamento constituye el antecedente del Servicio Nacional de Información de Crédito Bancario (Senicreb), creado en 1964 a petición de la ABM, el cual continúa funcionando en la actualidad. El Senicreb incorpora la información de créditos proporcionados por la banca comercial, la banca de desarrollo, arrendadoras financieras y empresas de factoraje de toda la república y proporciona el servicio de consultas a esas instituciones financieras, a las almacenadoras y a las uniones de crédito.

La información primaria de los deudores que consolida el Senicreb proviene de la *Relación de Responsabilidades*. Este es un reporte que las instituciones financieras están obligadas a entregar al Banco de México y que contiene datos de identificación de las personas morales y físicas con actividad empresarial que recibieron préstamos superiores a

⁷⁹ Ver Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, Artículo 14.

200 mil pesos⁸⁰, los saldos de los créditos que les hayan sido otorgados y las características de la cartera del cliente⁸¹. El Senicreb establece contratos con las instituciones crediticias para recibir la información acerca de los clientes de estas últimas de manera veraz y oportuna⁸²; a cambio, el Senicreb se compromete a proporcionar el servicio de consulta respecto de las obligaciones que un agente tuviera en una fecha determinada, con el conjunto de instituciones y uniones de crédito del país⁸³. La información que concentra el Senicreb se maneja de manera confidencial para cumplir con las disposiciones relativas al secreto bancario. En la actualidad la información se transmite de manera electrónica, tanto de las instituciones crediticias hacia Senicreb como de este último hacia las primeras⁸⁴. El servicio de consultas se cobra de acuerdo con los costos en que incurre Senicreb. A diferencia del mecanismo de cobro normalmente aplicado por los burós de crédito, Senicreb no cobra una cuota de inscripción sino solamente el costo promedio por consulta. El cobro se realiza *ex-post*, al acumularse las consultas realizadas durante el año.

⁸⁰ Los préstamos inferiores a ese monto se reportan de manera agregada de acuerdo a la rama de actividad económica del prestatario.

⁸¹ Esta información permitía al Banco Central vigilar que los créditos de las instituciones financieras se canalizaran hacia los fines que establecía la regulación vigente.

⁸² Sobre el régimen legal aplicable a Senicreb, el Artículo 33 de la Ley de Agrupaciones Financieras y el 74 de la Ley de Instituciones de Crédito establecían que las instituciones financieras estaban obligadas a participar en el sistema de información sobre operaciones activas que administra Banco de México; éste último tiene la facultad de notificar a esas instituciones financieras el nombre y las responsabilidades de un mismo deudor (sin identificar a las instituciones acreedoras). En la actualidad, el artículo 33 ha sido modificado y el 74 derogado para permitir la formación de SIC privadas.

⁸³ El contrato establecido entre Banco de México y las instituciones de crédito establece que los usuarios del servicio son exclusivamente las instituciones financieras que lo hayan suscrito. El contrato señala que las instituciones financieras se obligan a proporcionar al Banco de México la información contenida en sus relaciones de responsabilidades, obligaciones con instituciones de crédito del extranjero, informes de captación, regional y por intervalos, y todos aquellos reportes que la autoridad competente les indique. La información se deberá proporcionar dentro de los 10 primeros días al mes siguiente que corresponda. El Banco se obliga ante las instituciones a prestarles los servicios nacionales de información de crédito bancario y de información financiera. La información comprenderá las obligaciones a determinada fecha, que estén a cargo de alguna persona moral o física con actividad empresarial, a favor de las instituciones de crédito, por los conceptos de operaciones directas (préstamos, créditos, descuentos, cartera vencida, avales recibidos, deudas por reporto), operaciones contingentes (parte pendiente de ejercer en cuentas de créditos comerciales, etc.), responsabilidades solidarias (avales otorgados) e información cualitativa (sector institucional, grupo económico, número de oficinas acreditantes). Anteriormente las consultas podían hacerse por escrito, vía postal (atendidas en 24 horas y con límite de 15 solicitudes diarias por institución) o vía telefónica (5 solicitudes diarias como máximo); asimismo, las cuotas se pagaban por anualidades anticipadas. Todo ello ha cambiado en la actualidad, como se explica más adelante. El Banco se reserva el derecho de suspender el servicio a las instituciones que no cumplan con sus obligaciones y de cobrar cargos extras a quienes reporten la información de manera inadecuada. Cualquiera de las partes puede dar por concluido el contrato con aviso anticipado de 30 días.

⁸⁴ Cuando una de las instituciones financieras con quienes tiene contrato le solicita datos sobre algún sujeto, el Senicreb proporciona un reporte de información. Dicho reporte está formado por cuatro partes. La primera *identifica* al sujeto investigado por medio de su nombre y su registro federal de causantes. La segunda presenta la *cartera vigente*, las deudas corrientes consolidadas del sujeto y el número de acreedores. Lo anterior representa información positiva. La tercera parte presenta la información negativa constituida por la *cartera vencida* y fraudulenta. La última sección presenta la cartera *redescontada* del sujeto investigado. Aunque esta última información no depende directamente de las acciones del individuo, implícitamente representa la evaluación que los acreedores realizan de sus deudores; en otras palabras, los acreedores no redescuentan la cartera de aquellos clientes con quienes tienen mejor relación.

La Gráfica 4.1 presenta la evolución del número de consultas recibidas por el Senicreb en los últimos años. La clara tendencia ascendente de 1988 a 1995 se relaciona con el incremento del crédito durante casi todo ese periodo. Como es de esperarse, la caída del crédito iniciada en 1995, resultó en una contracción en los años siguientes en el número de consultas al Senicreb. A pesar de ello, el número de consultas hasta 1998 –aproximadamente 140 mil- se mantuvo muy por encima de las menos de 40 mil consultas registradas en 1988, cuando se inició la expansión⁸⁵. Sin embargo, en 1999 y 2000 el número de consultas se ha desplomado. Esta contracción, no se vincula únicamente con la baja en el otorgamiento de créditos; también se relaciona con la entrada al mercado de una SIC privada, el Buró de Crédito, el cual satisface muchas de las consultas que antes cubría el Senicreb.

Gráfica 4.1. Consultas al Senicreb

Fuente: Banco de México

En la Gráfica 4.1 puede observarse que el incremento más importante del número de consultas ocurrió durante la etapa de expansión del crédito; sin embargo, tal aumento en las consultas no implica que los créditos se hayan otorgado sobre mejores bases de información, pues para ello se requiere que el número de consultas crezca más que el número de préstamos. En el análisis siguiente, se supone que el volumen de crédito promedio por transacción se mantiene constante y que la única manera de contar con mejor información es aumentar el número de consultas; también se supone que todos los créditos de gran volumen se canalizaron a empresas y no a personas físicas. Durante el periodo de 1988-1995 el Senicreb era el único mecanismo con el contaban las instituciones que otorgaban crédito para compartir información; de hecho, aunque varios de los burós de crédito privados entraron al mercado en 1995, el único buró privado que en la actualidad está en funcionamiento pleno, inició operaciones en el área de empresas hasta fines de 1997. De este modo, los datos que reúne Senicreb -de créditos a personas morales y físicas superiores a 200 mil pesos- hasta 1997 constituyen un buen indicador de las consultas realizadas para el otorgamiento de créditos de elevado volumen. Así, es posible obtener el número de consultas realizadas por cada millón de pesos de crédito vigente –en términos

⁸⁵ También es relevante observar que el número de empresas asociadas con Senicreb se elevó de 17 en 1985 a 95 en 1995; al igual que el crédito, el número de empresas asociadas se redujo en los años posteriores. Del mismo modo, el número de créditos registrados pasó de poco más de 196 mil en 1986 a cerca de 530 mil en 1995, para reducirse a algo más de 500 mil registros en 1998.

reales- concedido a las empresas⁸⁶; es importante destacar que no necesariamente se trata de crédito nuevo, pues los datos incluyen la capitalización de intereses y la renovación de créditos. Como se aprecia en la Gráfica siguiente, desde 1987 se registra un descenso en el número de consultas por millón de pesos de crédito vigente; mientras en 1987 se efectuaban 8 consultas por millón de pesos, en 1995 solamente se realizaban 2. Es probable que en la etapa de expansión del crédito el volumen promedio de los préstamos haya aumentado y que, como se ha indicado, se trate de capitalizaciones o renovaciones de créditos, que no requieren de una nueva consulta; sin embargo, la magnitud de la contracción parece sugerir que muchos créditos de volumen superior a 200 mil pesos se otorgaron sin contar con el apoyo informativo del Senicreb.

Gráfica 4.2. Consultas al Senicreb por millón de pesos de crédito bancario

Fuente: Cálculos propios con datos de Banco de México.

A pesar de su importancia, y de la larga historia que el registro público tiene en México, el Senicreb enfrenta los mismos problemas que la mayor parte de los RPIC en el mundo. En primer lugar, el Senicreb tiene una base de datos limitada pues solamente recoge información proveniente de instituciones financieras acerca de personas morales o físicas con créditos superiores a 200 mil pesos. En segundo lugar, el Senicreb no cuenta con los mecanismos de coerción apropiados para forzar a los socios a proporcionar su información a tiempo, lo cual ocasiona rezagos. Finalmente, el proceso de adquisición de información del registro público se basa en la obligación impuesta a los organismos generadores de información de canalizar sus datos hacia el Senicreb. Así, los organismos generadores no tienen los incentivos suficientes para compartir su información pues no es una decisión voluntaria. Estos factores dan lugar a una base de datos limitada y a un servicio de consultas imperfecto.

Resulta interesante relacionar la evolución de las consultas al Senicreb con la de la cartera vencida de los bancos comerciales; esta última se elevó significativamente durante la reciente contracción crediticia, como se aprecia en la Gráfica 4.3. Los principales factores que explican el crecimiento de la cartera vencida de los bancos, iniciado en 1993, son dos. En primer lugar, la desaceleración económica observada en 1993 y la crisis de 1994-95; en segundo lugar, los cambios contables en el registro y reconocimiento de

⁸⁶ Este indicador está formado solamente por el crédito otorgado al sector privado, excluyendo créditos al consumo y a la vivienda. Se trata de millones de pesos a precios de 1990.

créditos vencidos⁸⁷. Sin embargo, los problemas de cartera vencida también están asociados con las condiciones de información en que se otorgaron los créditos bancarios durante la etapa de expansión; es decir, las limitaciones en la información con que contaban los bancos acerca de los usuarios del crédito en buena medida explican el volumen que la cartera vencida alcanzó en los años recientes.

Gráfica 4.3. Cartera Vencida como porcentaje de la Cartera Total

Fuente: Cálculos propios con datos del Banco de México.

Finalmente, es importante hacer un comentario sobre la participación de las instituciones de crédito en el sistema de información que maneja el Senicreb. Originalmente, el artículo 74 de la Ley de Instituciones de Crédito (LDI) y el artículo 33 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF) establecían la *obligación* de las instituciones de crédito y financieras respectivamente, a participar en el sistema del Senicreb. Sin embargo, el 23 de julio de 1993 el artículo 74 de la LDIC fue derogado mientras que el 33 de la LRAF fue reformado con la intención de promover el establecimiento de SICs privadas; el artículo 33 ahora establece que las SICs – y no directamente las instituciones prestamistas- deberán proporcionar al Banco de México la información y documentos necesarios para el cumplimiento de las funciones del banco central. Simultáneamente, el artículo 2º transitorio de la reforma a la LRAF de 1993 establece que “Las instituciones de crédito deberán continuar participando en el sistema de operaciones activas que administra el Banco de México, hasta en tanto no proporcionen dicha información a alguna SIC...o el propio banco deje de administrar el mencionado sistema”.

Esto parecería indicar que las instituciones crediticias no tendrían ya la obligación de reportar sus operaciones activas al Senicreb, en la medida en que proporcionen sus bases de datos a otra(s) SIC y en tanto hubieran rescindido el contrato que las comprometía con Senicreb pues la obligación de proporcionar la información al Senicreb, es ahora de las SICs y no de los prestamistas directamente. Sin embargo, dado que el Banco de México requiere de la información activa para la elaboración de estadísticas y sobre la base del artículo 36 de la Ley de Banco de México vigente, los prestamistas no pueden dejar de proporcionar información al Senicreb; esta obligación puede ser de carácter temporal, en la medida en que las SICs mejoren la calidad de su información y se desarrollen mecanismos

⁸⁷Ver la circular 1284 de la CNBV del 29 de diciembre de 1995.

para que el Senicreb obtenga la información activa de las SICs y no de los prestamistas. De cualquier manera, a pesar de la obligación de seguir proporcionando información al Banco de México, es derecho de los prestamistas dejar de utilizar el servicio de consultas del Senicreb, como ya ha venido ocurriendo con algunos bancos.

4.3. Regulación y estructura del mercado de información crediticia.

A pesar de las limitaciones en el funcionamiento del Senicreb, el limitado papel del crédito en la economía mexicana no hacía imperativo el desarrollo de esquemas alternativos para compartir información⁸⁸. Sin embargo, para enfrentar las necesidades de información que requería la expansión del crédito iniciada a fines de los ochenta, era necesario impulsar la formación de sociedades de información crediticia privadas. De esta forma, a partir de 1993 la SHCP y el Banco de México conformaron un esquema regulatorio para propiciar la formación de burós privados.

La regulación tiene dos elementos centrales. El primero de ellos es la protección tanto de las bases de datos de los asociados a una SIC, como de los sujetos investigados. Así, para formar una SIC o constituirse como usuario de la misma, se requiere autorización. Las reglas establecidas garantizan el respeto al secreto bancario y la reciprocidad; además, para consultar los datos de un sujeto, se necesita su anuencia escrita. El segundo elemento se refiere a la competencia y a la convivencia entre SICs; la regulación intenta evitar tratos de exclusividad entre una SIC y sus asociados, para lo que establece un sistema de intercambio de bases de datos entre SICs. En los siguientes apartados se describe esta regulación.

4.3.1 Protección de las bases de datos y de la privacidad de los individuos

Las bases para el establecimiento y funcionamiento de las SICs fueron fijadas por la reforma del artículo 33 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF)⁸⁹ del 18 de julio de 1993. Este artículo indica que tanto para establecer una SIC como para ser usuario de sus servicios, se requiere de autorización de la SHCP⁹⁰. Del mismo modo, “...solamente podrán ser usuarios de la información que proporcionen las sociedades... las entidades financieras y las personas que autorice la SHCP....”.

Al proporcionar los reportes de los sujetos investigados, las SICs deben guardar secreto sobre la denominación de las entidades acreedoras. Esto quedó establecido en la

⁸⁸ Como se indica más adelante, en el momento en que se expidió la regulación para las SICs, existía una empresa privada (CICSA-Datum) que recolectaba información sobre tarjetas de crédito; sin embargo, el funcionamiento de esta empresa era bastante limitado.

⁸⁹ De aquí en adelante, “el artículo”.

⁹⁰ A la letra, el mencionado artículo establece que “las entidades financieras ... podrán proporcionar información a empresas que ... tengan por objeto la prestación del servicio de información sobre operaciones activas. La prestación de servicios consistentes en proporcionar información sobre las operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga realizadas por entidades financieras, solamente podrá llevarse a cabo por *Sociedades de Información Crediticia* (SIC) que obtengan *autorización* ...”.

modificación al artículo 33 de la LARF del 15 de febrero de 1995, que indica que tanto para las SICs como para sus usuarios aplica el *secreto bancario*⁹¹.

Ahora bien, a pesar de disponer de con información acerca de algún individuo, las SICs no pueden proporcionar un reporte a menos que cuenten con la autorización escrita y firmada del individuo en cuestión. Esto quedó establecido en las *Reglas Generales a que se sujetarán las SICs*⁹² publicadas el 15 de febrero de 1995. Este requisito protege la privacidad de los sujetos investigados, pero dificulta el flujo de información en el sistema, lo cual podría retrasar algunas operaciones⁹³. En algunos países existe el mecanismo conocido como *autorización implícita*; dicho mecanismo indica que desde el momento en que un individuo solicita un crédito tácitamente acepta que se realice una investigación sobre su persona. A pesar de que el *Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas generales a que deberán sujetarse las SICs*⁹⁴ emitido por la SHCP el 1º de septiembre de 1997 establece algunas excepciones para contar con autorización escrita del sujeto investigado⁹⁵, esta regla podría obstaculizar el desarrollo de las SICs.

Generalmente los burós de crédito se sustentan en el principio de *reciprocidad*, que indica que solamente las empresas asociadas al buró tienen acceso a la base de datos que maneja el mismo buró. Este principio quedó incorporado en el artículo 33 de la LRAF que señala que “Las sociedades podrán negar su servicio a aquellas personas que no les proporcionen información para la realización de su objeto”⁹⁶. El principio de reciprocidad se hizo más preciso en las reglas, donde se establece el derecho de las SICs a negar el servicio a un usuario si éste realiza *efectivamente* operaciones activas y no proporciona tal información a la misma SIC.

4.3.2 Competencia e interacción entre SICs.

Uno de los objetivos centrales de la regulación es propiciar la competencia entre SICs. Para ello, el punto 16 de las reglas prohíbe que las SICs impongan tratos de exclusividad a sus socios; la regla establece que “Las sociedades no podrán impedir que sus usuarios proporcionen o soliciten información a otras sociedades”. Los usuarios, por su parte, están en libertad para asociarse con cuantas SICs consideren conveniente. La

⁹¹ Posteriormente, el 6 de enero de 1997, el Banco de México emitió las *disposiciones de carácter general* que indican las penas para aquellos empleados de las SICs que violen el secreto bancario al proporcionar información indebidamente a instituciones no autorizadas.

⁹² De aquí en adelante se les llama “las reglas”.

⁹³ Las modificaciones al artículo 33 establecen un procedimiento que permite a los *sujetos investigados* tener acceso a los reportes sobre su persona, así como un mecanismo para efectuar aclaraciones. Adicionalmente, el artículo indica que tanto los usuarios como las SICs responderán por daños y perjuicios que causen a los sujetos investigados, al proporcionar información con dolo o mala fe.

⁹⁴ De ahora en adelante se le llama “el acuerdo”.

⁹⁵ El acuerdo indica que el único caso en que los usuarios podrán no contar con autorización escrita de los sujetos investigados es en el de personas morales con créditos totales superiores a los cien mil Udis. Las “entidades” también podrán solicitar información sin autorización escrita del sujeto investigado cuando hayan proporcionado información del sujeto a la SIC consultada.

⁹⁶ El artículo indica también que el Banco de México “...podrá determinar las remuneraciones correspondientes a la prestación de [los] servicios de las SICs” y que la regulación podría establecer “limitaciones a la participación extranjera en el capital de este tipo de sociedades”.

decisión de los prestamistas particulares podría representar un problema para la formación de bases de datos completas, pues es factible que muchos prestamistas decidan vincularse con una sola SIC; esto generaría bases de datos fragmentarias y elevaría el costo de investigación. Para enfrentar esta dificultad, la regla 17 establece un mecanismo que promueve la formación de bases de datos con cobertura amplia. La regla 17 impone a los burós la obligación de compartir sus bases de datos con cualquier otra SIC que así lo solicite⁹⁷, a cambio de una contraprestación. Está claro que en primera instancia, las SICs estarían interesadas en compartir información en tanto todas tuvieran datos diferentes entre sí⁹⁸. Sin embargo, la regla puede dar lugar al problema del *gorrón*⁹⁹; es decir, una sociedad puede no esmerarse en extender su base de datos pues tiene garantizada la información recolectada por otras SIC. Previendo este problema, la regla limita el intercambio entre SICs a la *base primaria de datos* (BPD), compuesta únicamente por información de clientes relacionada con cartera vencida o fraudulenta¹⁰⁰.

El intercambio de bases de datos entre SICs constituye uno de los temas más delicados de la regulación; por ello, en las disposiciones del 6 de enero de 1997, el Banco de México establece lineamientos específicos para efectuar tal intercambio. Las disposiciones indican que la SIC que proporcione su BPD a otra SIC, ante la solicitud de su contraparte, debe transmitirla en su totalidad dentro del mes siguiente de la solicitud; además, las bases deben ser actualizadas dentro de los primeros 15 días naturales del mes en que fueron capturadas. Se indica también que los estándares que las sociedades establezcan para realizar el intercambio, serán acordados entre ambas partes, aunque los cargos que una SIC cobrará a otra por transmitir su BPD serán determinados por el Banco de México. Cabe indicar que, la supervisión del intercambio de datos es compleja, sobre todo en lo que se refiere a la verificación de la calidad y la oportunidad de los datos intercambiados.

⁹⁷ Al realizar el intercambio de bases de datos, la regla indica que las sociedades receptoras no requieren de la autorización original de los sujetos que componen la base de datos intercambiada.

⁹⁸ En la medida en que el número de registros distintos en la base de datos de cada SIC sea similar, es claro que todas estarían interesadas en compartir y que el pago por la información no sería necesario; sin embargo, si existe alguna SIC con una base de datos amplia y otra con una base pequeña, tal vez a la primera no le resulte atractivo compartir información. De ahí que se requiera una compensación monetaria adicional.

⁹⁹ Conocido en inglés como “free rider”.

¹⁰⁰ Las reglas y disposiciones emitidas indican que el intercambio de BPD incluye información de cartera vencida, *de acuerdo a la definición vigente de la misma*. En el *Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Reglas generales a que deberán sujetarse las Sociedades de Información Crediticia* del 1º/sep/1997, se define la BPD. Según el acuerdo, la BPD queda integrada por la información “que proporcionen [directamente] los usuarios a las sociedades” *relacionada* con cartera vencida, la información crediticia de personas morales con ingresos anuales superiores a 17 millones de Udis y la información de clientes con operaciones fraudulentas (el 30 de diciembre de 1997, la SHCP agregó la palabra “directamente ...”). Un préstamo se considera información relacionada con cartera vencida en los siguientes casos:

1. para créditos de amortización única de principal e intereses, a los 30 días naturales luego del vencimiento;
2. para créditos de amortización única pero con intereses periódicos, y créditos cuya amortización e intereses haya sido pactada en pagos periódicos (no hipotecarios ni de consumo duradero) a los 90 días naturales de vencido el pago de intereses respectivo;
3. para créditos revolventes a los 120 días naturales;
4. para créditos de vivienda a los 180 días o 6 mensualidades vencidas.

Con el objeto de reducir el riesgo en que las instituciones bancarias incurren al otorgar un préstamo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México emitieron una circular el 12 de febrero de 1998 que obliga a los bancos a consultar un reporte crediticio del cliente potencial, antes de efectuar la transacción¹⁰¹; el reporte puede provenir de cualquier SIC autorizada¹⁰². Esta medida, además de facilitar la supervisión de los intermediarios financieros, reduce el riesgo de las operaciones y coadyuva a la formación de bases de datos completas ya que todos los usuarios deben reportar sus bases de datos antes de poder realizar consultas. Esta medida podría tener un efecto negativo sobre la calidad de los reportes, en el caso en el que el mercado de información no fuese competitivo; es decir, las SICs podrían recibir incentivos negativos al tener una demanda garantizada, independientemente de la calidad de sus servicios .

Aparentemente, resulta paradójico que la regulación mexicana promueva la entrada y la competencia entre SICs, cuando a nivel internacional se registra una clara tendencia hacia la concentración de las bases de datos en unas cuantas empresas. A este respecto es necesario distinguir entre concentración de bases de datos y concentración de empresas. Como se mencionó, el cambio tecnológico y las externalidades propias de esta industria, han dado lugar a una gran concentración de las bases de datos. Sin embargo, ello no implica que deba de existir una sola empresa en el mercado; en otras palabras, la concentración de las bases de datos no se traduce necesariamente en que la industria sea un monopolio natural. Desde la perspectiva del regulador la competencia es deseable, debido a que genera bases de datos completas; los burós que participen en el mercado tratarán de diferenciarse entre sí por medio de esfuerzos para incorporar a usuarios aún más pequeños. Ello se traducirá en bases de datos completas, aunque marginalmente distintas para todas las SICs que permanezcan en el mercado. Del mismo modo, la competencia genera reportes de mayor calidad, más oportunos y veraces. De ahí que la regulación busque promover la entrada y la competencia entre SICs.

4.4. Estructura del mercado.

4.4.1 Antecedentes

El primer intento de conformar un sistema privado de información crediticia se inició en 1963 cuando funcionarios de Banamex fundaron la Promotora de Información, S.A. (Prominsa); esta empresa tenía por objeto formar una base de datos de personas físicas que permitiera tomar decisiones en el otorgamiento de tarjetas de crédito¹⁰³. Sin embargo, la falta de soporte tecnológico y la participación restringida de las empresas que emitían tarjetas de crédito, limitaron el desarrollo de Prominsa.

¹⁰¹ La circular original de la CNBV es la 1413. La Circular-Telefax 25/98 del Banco de México, del 8 de julio de 1998, dirigida a las instituciones de Banca Múltiple ratifica esta medida.

¹⁰² Dado que el reportar al Senicreb es obligatorio y dado también que para poder consultar la base de datos de una SIC los bancos deben reportar información a esa SIC, puede plantearse que el hacer las consultas obligatorias propicia que la actividad del RPIC sea redundante. Sin embargo, en tanto la calidad de la información del Senicreb sea superior a la de las SICs, su continuo funcionamiento es necesario.

¹⁰³ Las tarjetas de crédito fueron introducidas al mercado en la misma época.

De esta forma, en 1973 se realizó un nuevo intento por conformar una base de datos que proporcionara información sobre el otorgamiento de tarjetas de crédito; con ese objetivo se fundó la Central de Informes y Cobranzas, S.A. (CICSA). En este caso, los tres procesadores de tarjetas de crédito de la época (Bancomer, Banamex y Prosa), entregaron sus bases de datos de tarjeta-habientes a CICSA; para 1989 CICSA había logrado integrar al sistema a otros procesadores de tarjetas como Sears, Diners Club y American Express. Como ocurrió con Prominsa, CICSA careció del apoyo tecnológico adecuado y de los estándares de calidad necesarios, tanto en la recolección de información como en el reporte de la misma. Así, luego de problemas administrativos al interior de CICSA, en 1993 su razón social cambió a Corporación de Información Crediticia, S. A., cuya denominación comercial fue Datum, al tiempo que se introdujeron importantes mejoras tecnológicas. Las principales instituciones bancarias del país eran los accionistas de Datum, al igual que lo habían sido de CICSA¹⁰⁴; sin embargo, Datum también proporcionó el servicio de información a diversas empresas no bancarias. Datum operó hasta 1995, cuando su base de datos se transfirió al Buró de Crédito que funciona en la actualidad y del cual se habla en la sección siguiente.

Es necesario indicar que tanto Prominsa como CICSA-Datum, durante la mayor parte de su existencia enfrentaron problemas tecnológicos y de calidad de la información, pues no contaban con mecanismos creíbles de penalización y de supervisión. Además, su base de datos era reducida, ya que solamente reunía información de deudores de tarjetas de crédito. Estos elementos explican la limitada calidad del sistema que manejaban y la necesidad de conformar mejores mecanismos para compartir información.

4.4.2 Estructura del Mercado en la Actualidad

El vigorosa evolución del crédito en los primeros años de los noventa propició el interés de varias empresas privadas para participar en el recientemente regulado mercado de información crediticia en México. A principios de 1994 el Grupo CIS de Guadalajara y la empresa norteamericana TRW¹⁰⁵ IS&S International Inc. constituyeron la empresa Comcred con el objeto de funcionar como buró de personas físicas y morales bajo la marca Datacredit. Del mismo modo, en febrero de 1994, la ABM anunció su intención de formar un organismo que recibiera la información generada por los bancos que conforman la Asociación, construyendo sobre la base de la empresa Datum mencionada anteriormente. Para este proyecto, los bancos se asociaron con Trans Union. Así, el 16 de julio y el 16 de agosto de 1995 respectivamente, Comcred y Trans Union de México¹⁰⁶ fueron autorizados por la SHCP para actuar como SIC. Trans Union funcionaría bajo el nombre de Buró de

¹⁰⁴ En 1993, 18 bancos eran socios de CICSA.

¹⁰⁵ Recientemente cambió su denominación a Experian a nivel internacional.

¹⁰⁶ Trans Union cuenta con 25% de la propiedad de esta SIC, mientras que la empresa de evaluación crediticia Fair Isaac posee otro 5%; el restante 70% es propiedad de los bancos miembros de la ABM (Reforma, Negocios del 13 de marzo de 1996).

Crédito¹⁰⁷. Del mismo modo, el 15 de octubre de 1995, la empresa Equifax de México recibió la autorización para fungir como SIC¹⁰⁸.

De estas SIC la única que ha florecido es el Buró de Crédito, cuya estructura original se modificó el 7 de julio de 1997; en esta fecha la empresa americana Dunn and Bradstreet (D&B)¹⁰⁹ fue autorizada por la SHC para funcionar como SIC, en sociedad con el Buró. De esta forma, el Buró de Crédito quedó conformado por dos divisiones, bajo la misma dirección general: una dedicada a la información de personas físicas encabezada por Trans Union y la otra especializada en personas morales y físicas con actividad empresarial, dirigida por Dunn & Bradstreet.

Dada la profunda contracción del crédito de los últimos años, resulta notable el dinamismo mostrado por el Buró de Crédito. Según información proporcionada por el propio Buró, la división de personas físicas pasó de contar con 93 empresas asociadas en 1996 a 290 en la primera mitad de 2000; en cuanto al giro de las empresas asociadas en este último año, 115 son automotrices, 37 comerciales, 37 hipotecarias o inmobiliarias, 32 bancos y 23 uniones de crédito. El incremento en el número de consultas que ha recibido la división de personas físicas del Buró es aún más impresionante, como refleja la Gráfica 4.4; dichas consultas pasaron de 199 mil en 1996 a 421 mil en promedio mensual en los primeros cinco meses del año 2000. Esto implica que el número de consultas en esta división se ha elevado en 111% en el periodo; dada la evolución del crédito, tal comportamiento se explica por el vacío casi total en información sobre personas físicas que existía antes de la entrada de las SICs, vacío que esta siendo satisfecho por el Buró.

Gráfica 4.4. Buró de crédito: número de consultas al segmento de personas físicas.

Fuente: Buró de Crédito.

La división de personas morales del Buró de Crédito, que empezó a funcionar a fines de 1997, también ha mostrado un vigor considerable. El número de consultas

¹⁰⁷ Según declaraciones del 9 de marzo de 1995 del presidente de la ABM, José Madariaga “ todas las instituciones financieras...” serían socios del buró de crédito de personas físicas, aunque ninguna de ellas podría tener más del 15% del capital, independientemente de que aportara más del 15% de la base de datos.

¹⁰⁸ En octubre de 1996, el Buró de Crédito de Chihuahua presentó una solicitud para organizar una SIC, pero a la fecha no ha entrado en funcionamiento.

¹⁰⁹ La solicitud de autorización establece que D&B invertirá el 25% del capital (de 12 millones de pesos), Trans Union el 5%, Bancomer, Banamex y Serfin el 15% cada uno, Inverlat el 6.6%, Confía 2.4%, Banorte el 1.45% y 30 bancos mas aportarán el 10.2% restante.

promedio mensual en 1998 fue de menos de 6 mil; sin embargo, el promedio mensual para los 5 primeros meses del año 2000 se elevó a 12 mil 800, lo que representa un incremento de más del 100%. Es útil relacionar las cifras de la división de personas morales del Buró con el número de consultas que recibe el Senicreb, pues en un segmento del mercado, los servicios de ambas instituciones se traslapan. Es decir, dado que la cobertura del Senicreb se limita a créditos superiores a 200 mil pesos, se puede suponer que mayormente se canalizan hacia personas morales; la relación entre ambas instituciones permite conformar una idea de la cobertura informativa del mercado de personas morales. Durante 1997 y 1998, Senicreb fue consultado entre 11 mil 500 y 12 mil ocasiones por mes. Para 1999, sin embargo, el promedio mensual de consultas cayó a alrededor de 2 mil 500 y a menos de 300 en el primer semestre de 2000; este significativo descenso, sin duda, está relacionado con la entrada en funcionamiento de la sección de personas morales del Buró de Crédito.

Independientemente de las causas del desplazamiento de las consultas del Senicreb hacia el Buró, esto refleja que en los últimos años no ha existido un incremento significativo en el número total de consultas en este segmento del mercado. Sumando el promedio mensual de consultas que las dos instituciones recibieron para 1999, el total es de menos de 13 mil; este número no es muy superior al promedio de 12 mil consultas que atendió el Senicreb en 1998. Es decir, el dinamismo del Buró en este segmento, no parece haber repercutido en un incremento significativo de las consultas que realiza la industria en su conjunto.

En lo que se refiere a las otras dos SIC autorizadas, Datacredit y Equifax, la historia contrasta con la del Buró de Crédito pues ninguna fue capaz de establecer una presencia en el mercado; de este modo, Datacredit dejó de prestar sus servicios a fines de 1997¹¹⁰, mientras que Equifax lo hizo a principios del año 2000. La salida de estas empresas parece estar relacionada con las dimensiones del mercado de crédito y de información en México; es decir, es probable que en la actualidad, la industria de información enfrente una restricción por el lado de la demanda, la cual solamente permita el sostenimiento de una empresa de información. La escasa demanda aparentemente constituye un elemento importante en la salida de estas empresas porque al menos Equifax realizó el intercambio de bases de datos con el Buró de crédito¹¹¹; a pesar de ello, Equifax no contó con una demanda de consultas suficiente como para mantenerse en el mercado¹¹².

¹¹⁰ El Diario Oficial del 30 de diciembre de 1997 informó que se revocaba la licencia otorgada a Comcred para operar como SIC, a solicitud expresa de la propia compañía.

¹¹¹ Equifax y el Buró de Crédito efectuaron el intercambio de BPD en junio de 1998. En las negociaciones para efectuar dicho intercambio se mantuvieron diferencias tanto en lo que se refiere al formato, como en lo que se refiere al costo de la transmisión. En cuanto al costo del intercambio de BPD, el Banco de México estableció que sería el equivalente en pesos a 3.84 dólares por minuto de transmisión. En cuanto a los campos de contenido de información, el Banco consideró que no se debería de limitar el número de los mismos sino que debería incluirse toda la información crediticia que las SICs hubieran recibido de los usuarios; sin embargo, no se emitió una propuesta concreta con respecto a los campos de información que deberían intercambiarse. Datacredit no llegó a realizar el intercambio de bases de datos con el Buró porque salió del mercado antes de que se terminara de definir la regulación correspondiente.

¹¹² Resulta interesante mencionar que el 10 de febrero de 1994, aún antes de que alguna de las SICs entrara en operación y cuando la regulación en el área aún se encontraba en proceso de definición, Comcred-Datacredit, presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia (CFC) en contra de Bancomer, Banamex, Serfin, Prosa-Carnet y la ABM. Según Datacredit, estas instituciones tenían la "intención" de fundar una SIC

De esta forma, actualmente el mercado solamente cuenta con una SIC¹¹³, el Buró de Crédito, la cual ha mostrado un importante crecimiento. Dicha expansión no obedece a un crecimiento del crédito otorgado, sino a otros factores. El mayor impulso se ha registrado en el segmento de información de personas físicas, porque antes de la entrada del Buró, existía un vacío casi total de información. En este segmento la participación del Buró ha representado una importante mejoría en la información compartida. En lo que se refiere al segmento de personas morales, el crecimiento de las consultas del Buró se relaciona con la caída de las consultas que recibe el Senicreb; de este modo, las mejoras informativas en este segmento no son significativas. Otro factor que coadyuva a explicar la evolución del Buró, es la regulación que obliga a todos los prestamistas a consultar a algún buró de crédito antes de otorgar un crédito.

Es aún muy pronto para efectuar una evaluación definitiva de la regulación mexicana; sin embargo, pueden hacerse observaciones tanto en lo que se refiere a la cobertura, como en cuanto a la competencia. No hay duda de que la industria de información hoy en día tiene una cobertura más amplia que en 1993, cuando se promulgó la regulación. Existen importantes segmentos cubiertos que antes estaban totalmente ausentes del mercado informativo. En lo que se refiere a los mecanismos regulatorios que permiten la competencia, solamente existe una observación en el intercambio de bases de datos; por tanto, no hay información suficiente para evaluar la efectividad de este mecanismo. A este respecto, cabe agregar que, independientemente del tamaño del mercado, no existe suficiente evidencia teórica ni empírica que determine el número de empresas óptimo en el mercado de información ni la competencia que debe existir entre ellas.

que dejase fuera a todos sus posibles competidores por medio de "advertir a sus clientes y suscriptores de que si contratan con ellos, no podrán contratar con otros el mismo servicio"; es decir, según la denuncia, las empresas demandadas "obligan" a sus accionistas y usuarios a no proporcionar información crediticia a ningún otro buró de crédito. Comcred señaló que a consecuencia del anuncio de la ABM, varios bancos que habían manifestado interés en sus servicios, se habían retractado. La denuncia indicaba que la CFC debería de "prevenir futuras prácticas monopólicas" por lo que se tendría que evitar la formación del buró promovido por la ABM. El 14 de abril de 1994, la CFC notificó a Comcred que su denuncia contra un número de bancos por prácticas monopólicas, resultaba improcedente. La CFC consideró que la "posibilidad de desplazamiento de otros agentes económicos del mercado relevante" debería ser un acto "inminente y no un acto futuro e incierto", por lo que rechazó la denuncia. Cabe mencionar que la regulación que finalmente se conformó, no contempla forzar a algún prestamista a no asociarse con la SIC que este haya escogido; es decir, es privilegio de los prestamistas elegir la SIC de su confianza para compartir información. La regulación sin embargo, permite que otras SIC tengan acceso a la información de esos prestamistas por medio del intercambio de bases primarias de datos entre SICs. Este intercambio da lugar a que todas las SICs autorizadas posean una base de datos amplia; sin embargo, para permanecer en el mercado, cualquier SIC debe tener suficientes socios para garantizar una demanda por reportes suficiente. Este no parece haber sido el caso de Equifax y Datacredit.

¹¹³ Es importante señalar que en México se están desarrollando otros mecanismos privados, especializados y regionales, para compartir información. Entre los casos más destacados está el establecido por las empresas telefónicas de larga distancia en agosto de 1998; los concesionarios de larga distancia han formado una base de datos de clientes morosos que les permite identificar a los clientes incumplidos. Del mismo modo, en algunos estados del norte del país las Sofoles hipotecarias consultan las bases de datos de ciertas tiendas de autoservicio para investigar el historial de sus clientes potenciales; en Guadalajara la empresa "Invycó, crédito solvente" proporciona el servicio de información legal referida a fraudes, demandas y eventos similares.

5. Conclusiones

De lo expuesto anteriormente se pueden derivar conclusiones, tanto a nivel teórico como de la experiencia internacional, que se aplican al caso mexicano. En lo que se refiere a cuestiones generales, se puede afirmar que el desarrollo de mecanismos para compartir información o sociedades de información crediticia (SIC) genera beneficios sociales importantes pues aminora los problemas de información que enfrentan los mercados crediticios. La identificación de los individuos que se deriva de la acción de estos mecanismos impone una mayor disciplina de pago a los prestatarios y permite a las instituciones crediticias realizar un análisis de riesgo de mejor calidad. Adicionalmente, compartir información fomenta la competencia entre prestamistas y, bajo ciertas condiciones, permite la expansión del mercado. Puesto que compartir información redundante en una reducción del costo del crédito, estos mecanismos generan beneficios especiales para los préstamos de bajo volumen, como los que se conceden a pequeñas y medianas empresas y los que se canalizan hacia el consumo. Lo anterior destaca la importancia de los mecanismos para compartir información en los países en desarrollo, dadas los escasos recursos crediticios con que cuentan.

A pesar de los beneficios que generan, la formación de los mecanismos para compartir información crediticia no siempre ha ocurrido de manera espontánea. Los problemas de inicio obedecen, por un lado, a que el incremento de la competencia reduce los incentivos de los miembros potenciales para participar en las SICs. Por otro lado, los socios potenciales deben estar convencidos de la calidad moral y de la imparcialidad con la que las SICs manejarán sus bases de datos; por ello, las SICs deben poseer una sólida reputación y deben contar con instrumentos creíbles de coerción sobre las empresas asociadas. Finalmente, existen características del mercado crediticio que hacen más factible y necesario el surgimiento de las SICs, tales como el tamaño del mercado, la movilidad de los agentes y la heterogeneidad de los mismos.

En algunos países, las SICs tienen un origen privado, espontáneo y la asociación con el mecanismo es voluntaria; en muchos casos, al iniciarse las SICs cuentan con una cobertura regional o especializada en mercados particulares, para extenderse posteriormente hacia la cobertura universal (información de todos los sectores) y al nivel nacional. En otros países, ante la carencia de mecanismos privados, las autoridades financieras han establecido registros públicos de información crediticia (RPIC). La participación en los RPIC suele ser obligatoria y su cobertura se especializa en instituciones financieras.

Independientemente del origen institucional, existe una estrecha asociación entre la profundidad del mercado de crédito y el desempeño de los mecanismos para compartir información. Sin embargo, no puede hablarse de una causalidad de la información al crédito o viceversa y solamente puede constatarse que en el desarrollo de los dos mercados, el de crédito y el de información, existe una gran correspondencia.

Para la muestra de países que se analiza en este trabajo, se encuentra que aquellos que cuentan con burós privados de origen espontáneo, tienen un sistema de información y de crédito superior al de los países que poseen un registro público de información crediticia. Ello podría obedecer a las limitaciones con que funcionan los RPIC, entre las

que destaca la cobertura restringida de sus bases de datos. Sin embargo, una investigación reciente para un gran número de países (Jappelli y Pagano, 1999) encuentra que en tanto se comparta información, el origen institucional del buró es irrelevante; aquellos países que comparten información, tienen mayor profundidad crediticia, menor probabilidad de falta de pago y menor tasa de cartera vencida que los países que no comparten información.

En el caso de los mecanismos de participación voluntaria, la experiencia de algunos países muestra que la competencia entre sociedades de información es posible. Este fenómeno tal vez se relaciona con el hecho de que, desde la perspectiva de los socios, no existe un costo adicional en suscribirse a más de un buró, en tanto las bases de datos o los reportes de los distintos burós no sean idénticos. Del mismo modo, la estructura de costos de la industria no parece implicar que se trata de un monopolio natural. La competencia en esta industria es deseable porque permite una cobertura más amplia y un servicio más oportuno y veraz. Sin embargo, la experiencia internacional muestra una tendencia hacia la concentración en pocos burós; esto se relaciona con las externalidades positivas que una amplia base de datos genera y con el cambio tecnológico que permite el manejo centralizado de grandes cantidades de información. Basados en esta tendencia algunos autores han planteado que la industria es un monopolio natural (Pagano y Jappelli, 1993). Sin embargo, esta afirmación no está suficientemente fundamentada ni teórica ni empíricamente. Cabe mencionar que la concentración no necesariamente lleva al monopolio y que puede existir competencia con pocas empresas en el sector.

En varios de los países en los que originalmente existe un RPIC, se ha registrado la entrada de burós privados al mercado. En principio las SICs se han desenvuelto principalmente en nichos no cubiertos por los RPIC; sin embargo, conforme se desarrollan las SICs, han alcanzado también el limitado terreno del RPIC. En principio, no es deseable que exista competencia entre el RPIC y las SICs porque tienen características y funciones distintas. Sin embargo, en aquellos casos en que existe poca competencia entre burós privados, el RPIC puede imponer un nivel mínimo de calidad en los reportes de la industria en general. En todo caso, tanto las posibilidades de competencia como, en general la estructura de la industria de las SICs, requieren de estudios específicos rigurosos.

En lo que se refiere a la experiencia de México, puede apreciarse que el crédito bancario en la actualidad tiene un papel limitado en la economía. Los cambios regulatorios de fines de los ochenta y principios de los noventa dieron como resultado una importante expansión del crédito; sin embargo, ese fenómeno resultó transitorio. Así, en el segundo lustro de los noventa, el crédito bancario se contrajo regresando con ello al nivel que tenía antes de la expansión. El atraso actual del crédito bancario es particularmente grave en lo que se refiere a recursos orientados a las pequeñas empresas y al consumo; de hecho, durante los últimos años las instituciones crediticias no bancarias han aumentado su participación de manera importante en particular en los préstamos a la vivienda y al consumo.

Dado este escenario, y reconociendo la estrecha correlación que existe entre el desarrollo del mercado de crédito y el de los mecanismos de información, no resulta extraño encontrar la baja profundidad del sistema de información crediticia mexicano. Dicha baja profundidad no corresponde a la antigüedad que al menos uno de los

mecanismos para compartir información crediticia tiene en nuestro país. En 1964, el Banco de México estableció un sistema de estadística e información, denominado Senicreb, cuyos antecedentes datan de los años treinta. Aunque la función principal del Senicreb ha sido la generación de estadísticas que permiten al Banco cumplir con su papel regulador, también ha fungido como RPIC. Como la mayor parte de los RPIC, la base de datos del Senicreb es limitada pues registra exclusivamente a aquellos clientes de instituciones financieras con deudas superiores a un cierto límite (de 200 mil pesos en la actualidad). Durante la expansión del crédito de la primera mitad de los noventa, las consultas al Senicreb se incrementaron sustancialmente; de 1995 a 1998, las consultas se contrajeron ligeramente, pero en 1999 y 2000 se desplomaron. La caída de las consultas al Senicreb puede relacionarse con tres factores: en primer lugar, con la contracción generalizada del crédito. En segundo lugar con la regulación financiera reciente que permite a los bancos consultar a cualquier SIC, no necesariamente al Senicreb; finalmente, con la entrada en actividad del Buró de Crédito, muchas de las consultas que los bancos solían hacer al Senicreb, ahora son canalizadas al Buró.

También durante los años sesenta, algunos bancos privados formaron una empresa para compartir información sobre deudores de tarjetas de crédito, la cual se mantuvo en operación hasta 1993 bajo diferentes razones sociales, tales como Cicsa y Datum. Esta empresa funcionó con limitaciones tecnológicas y mantuvo un alcance limitado a la información de usuarios de tarjetas de crédito; esta empresa constituye el antecedente del Buró de Crédito que funciona en la actualidad.

Históricamente, el crédito otorgado por las instituciones financieras se mantuvo restringido y concentrado; esta situación no permitía el desarrollo de bases de datos amplias dentro de los mecanismos existentes para compartir información, pues dicha información constituye la materia prima de las SICs. Sin embargo, lo reducido de las bases de datos no representaba un problema mayor para los prestamistas. Ello, porque las mismas restricciones al crédito no hacían necesario contar con mayor cobertura y con mejor calidad informativa; en otras palabras, no existía información completa pero tampoco era indispensable. Esta situación de retroalimentación limitó el desarrollo tanto de los procesos seguidos por los prestamistas para otorgar créditos, como de las instituciones que manejaban la información crediticia. Así, cuando se presentó el rápido aumento del crédito de fines de los ochenta, ni los bancos estaban preparados en sus prácticas de otorgamiento de crédito, ni las instituciones para compartir información crediticia contaban con las bases de datos para apoyar dicha expansión. Estos elementos influyeron negativamente en la crisis bancaria de 1994-1995.

Enfrentadas a la expansión del crédito y posteriormente a la crisis bancaria, las autoridades financieras emitieron regulaciones, de 1993 a 1998, para propiciar el desarrollo del mercado de información mexicano. Entre los elementos centrales de la regulación se encuentra el impulso a la formación de bases de datos amplias, el estímulo a la competencia entre SICs y la protección de la información. En aras de fomentar la competencia, la regulación prohíbe que una SIC impida a sus socios tratar con otros burós de crédito; además, para fomentar la formación de bases de datos amplias, la regulación obliga el intercambio de bases primarias de datos entre SICs. Finalmente, por razones prudenciales,

la regulación establece la obligación de las instituciones financieras de consultar los reportes de alguna SIC autorizada antes de proporcionar un crédito.

Durante el periodo en que se conformó el cuerpo regulatorio descrito, se incorporaron al mercado tres SIC. Una de ellas -el Buró de Crédito- es propiedad del conjunto de los bancos comerciales mexicanos en sociedad con dos burós de crédito internacionales (Trans Union y Dunn & Bradstreet); tanto la base de datos de esta SIC, como sus consultas han registrado un importante crecimiento en los últimos años. En contraste, las otras dos SIC (Datacredit y Equifax) no tuvieron éxito y abandonaron el mercado.

Varios factores determinaron este resultado. En lo que se refiere al Buró, el crecimiento del número de consultas de personas físicas, obedece a que antes del funcionamiento del Buró, existía un vacío de información casi total; en cuanto a personas morales, el aumento en las consultas se relaciona con el virtual desplazamiento del Senicreb de este segmento. Ambas tendencias se vinculan con la demanda de los servicios que realizan las instituciones bancarias, las cuales canalizan sus consultas al Buró de crédito.

La salida de los competidores del Buró se relaciona con esos factores y con otros elementos adicionales; en el caso de Datacredit, no llegó a realizar el intercambio de bases de datos con el Buró por lo cual su base de datos era muy pobre para competir. En cuanto a Equifax, a pesar de haber efectuado el intercambio de bases de datos con el Buró, enfrentó una demanda muy limitada. La restricción de la demanda parece señalar un problema de fondo: es probable que el reducido tamaño del mercado de crédito mexicano, no permita la existencia de varios burós de crédito.

De esta forma, la estructura actual del mercado de información muestra un RPIC que recibe un número escaso y decreciente de consultas, una SIC dominante con una base de datos en expansión y algunos incipientes brotes de mecanismos regionales o especializados para compartir información. Es aún muy pronto para evaluar la regulación mexicana en este rubro. Sin embargo, puede constatar que hoy en día se cuenta con una base de datos más amplia y con mejor información acerca de algunos segmentos del mercado, que la que existía antes de que se aplicara la regulación. En cuanto a la estructura industrial, el tamaño del mercado no parece permitir el sostenimiento de más de una empresa. Es claro que en la medida en que el crédito no se reactive, aunque solamente opere una SIC, el crecimiento de las bases de datos encontrará un límite. Del mismo modo, la estructura industrial se mantendrá concentrada dada la insuficiencia en la demanda de consultas.

Es importante agregar que el desarrollo de los mecanismos para compartir información, es tan sólo uno de los componentes requeridos para que el crédito adquiera mayor importancia en la economía mexicana; es decir, la mejora en los sistemas de información que se ha registrado, es una condición necesaria pero no suficiente para reactivar el crédito. Es por ello necesario complementar la mejoría informativa con otros elementos que permitan el aumento de los crédito otorgados; esto generaría nueva información y con ello impulsaría el desarrollo de los mecanismos dedicados a compartir tal información.

Referencias Bibliográficas

Banco Central de la República Argentina (1998), "Credit Information: Conceptual Issues and Description of the Argentine Case", mimeo.

Banco Central de la República Argentina (1997), "Central de Deudores del Sistema Financiero", mimeo.

Berlin Mitchell (1996), "For better and for worse: three lending relationships", *Federal Reserve Bank of Philadelphia, Business Review*, November-December.

Diamond, Douglas W. (1989), "Reputation Acquisition in Debt Markets", *Journal of Political Economy*, vol. 97, no. 4, 828-862.

Dell'Ariccia, Giovanni (1998). Asymmetric Information and the Market Structure of the Banking Industry, *IMF Working Paper* WP/98/92.

Jaffee, Dwight M. and Russell, Thomas (1976), "Imperfect information, uncertainty, and credit rationing", *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 40, no. 4, 651-666.

Jappelli, Tullio (1997), "Credit bureaus: effects on market performance and the role of government intervention", mimeo presentado en el Workshop "The role of timely and reliable information in the development of stable financial markets", World Bank and BCRA, Buenos Aires, Argentina.

Jappelli Tulio and Pagano Marco. (1999), "Information Sharing, Lending and Defaults: Cross-Country Evidence", mimeo, *Centre for Studies in Economics and Finance*, Working Paper No. 22.

Jaynes, Gerald D. (1978), "Equilibria in Monopolistically Competitive Insurance Markets", *Journal of Economic Theory* 19, 394-422.

Klein, Daniel B. (1992), "Promise Keeping in the Great Society: A Model of Credit Information Sharing", *Economics and Politics*, vol. 4, no. 2, 117-136.

Kreps, David M. and Wilson, Robert (1982), "Reputation and Imperfect Information", *Journal of Economic Theory* 27, 253-279.

Laband, David. N. and Maloney, Michael T. (1994), "A theory of credit bureaus", *Public Choice* 80, 275-291.

Madison, James H. (1974), "The Evolution of Commercial Credit Reporting Agencies in Nineteenth-Century America", *Business History Review*, Vol. XLVIII, No.1, 165-186.

Nakamura, Leonard I. (1993), "Recent Research in Commercial Banking: Information and Lending", *Financial Markets, Institutions and Instruments*, vol.2, no. 5, 73-88.

Novshek W. and Thoman L. (1998), "Information disaggregation and incentives for non-collusive information sharing", *Economic Letters* 61, 327-332.

Padilla, A. Jorge and Pagano, Marco (1999), "Sharing Default Information as a Borrower Discipline Device", mimeo, *Centre for Studies in Economics and Finance* Working Paper no. 21.

Padilla, A. Jorge and Pagano, Marco (1997), "Endogenous Communication Among Lenders and Entrepreneurial Incentives", *Review of Financial Studies*, vol. 10, no. 1, 205-236.

Pagano, Marco and Japelli, Tullio (1993), "Information Sharing in Credit Markets", *Journal of Finance*, vol. 48, no. 5, 1693-1718.

Rothschild M. and Stiglitz S. (1976), "Equilibrium in Competitive Insurance Markets: an Essay on the Economics of Imperfect Information". *Quarterly Journal of Economics* 80, 629-49.

Salop, S. (1979). Monopolistic competition with outside goods. *Bell Journal of Economics*, 10: 141-156.

Stiglitz, Joseph E. and Weiss, Andrew (1981), "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information", *American Economic Review*, vol. 71, no. 3, 393-410.

Vercammen, James A. (1995), "Credit Bureaus Policy and Sustainable Reputation Effects in Credit Markets", *Economica* 62, 461-478.

Vives, Xavier (199), "Trade association disclosure rules, incentives to share information, and welfare", *Rand Journal of Economics*, vol. 21, no. 3, 409-430.

Anexo 1. Regulación de México

- Artículo 33 de la Ley para regular las Agrupaciones Financieras de 1990, antes de ser reformado (obligación de participar con el Senicreb).
- Artículo 74 de la Ley de Instituciones de Crédito antes de ser derogado.
- Ley Federal de Protección al Consumidor, artículos 16,17 y 18.
- **23/jul/1993.** Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
- **15/feb/1995.** Reglas Generales a que deberán sujetarse las Sociedades de Información Crediticia
- **27/dic/1996.** Disposiciones de carácter general a las que se sujetarán las Sociedades de Información Crediticia para proporcionar su base de datos a otras Sociedades de Información Crediticia.
- **1º/sep/1997.** Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Reglas generales a que deberán sujetarse las Sociedades de Información Crediticia.
- **30/dic/1997.** Acuerdo por el que se modifica el tercer párrafo de la decimaséptima de las Reglas Generales a que deberán sujetarse las Sociedades de Información Crediticia.
- **12/feb/1998.** Disposiciones de Carácter Prudencial en Materia de Crédito de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Anexo 2: Comparación Internacional

PAIS	BURO PUBLICO (Public Credit Registrar)	BURO PRIVADO (Es o no formado por los Bancos)	TIPO DE INFORMACION	SE COMPARTE INFORMACION (entre burós)	COMENTARIO
Argentina	Desde 1991, el Banco Central de la República Argentina procesa información positiva y negativa de las entidades financieras, de deudores cuya deuda sea superior a los 50 USD, en una base de datos llamada "Central de Deudores del Sistema Financiero".	Existen 110 institutos de información crediticia regionales y varios burós nacionales como: Veraz (Equifax), Fidelitas (Experian), Dil, Dun & Bradstreet Argentina y Veritas.	Positiva y negativa.	Ocasionalmente a nivel regional.	El BCRA pone a disposición del público la información negativa, incluso en Internet. Esto provoca que la información negativa sea de conocimiento público.
México	Desde 1964 el Banco de México administra un sistema de información positiva y negativa denominado Senicreb, que incorpora la totalidad de los créditos mayores a 200 mil pesos.	Operan dos burós privados: El Buró de Crédito (formado en 1996 por la Asociación Mexicana de Banqueros) y Equifax inició en 1997, tiene una operación incipiente.	Los burós procesan información positiva y negativa.	Sólo se comparte información negativa entre burós.	No existe una verdadera competencia entre burós, de hecho, la mayoría de los bancos están integrados verticalmente con el Buró Nacional.
Chile	Desde 1975 la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) es una institución autónoma que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda mantiene información negativa sobre los deudores de los bancos y sociedades financieras.	El SINACOFI (sociedad formada por miembros de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras) proporciona información negativa a los bancos y empresas financieras suscritas, incluido el Banco Central. Además hay otros burós como: Dicom (Equifax) para consumidores, y Veritas (Info Alliance) y TWS para empresas.	El SINACOFI procesa sólo información negativa y los demás burós positiva y negativa.	La SBIF difunde información a los burós privados.	El buró público no es manejado por el Banco Central sino por los servidores de supervisión bancaria.
Estados Unidos	No existe un buró público.	Existen desde 1890. Actualmente hay 499 burós regionales y especializados, y 3 burós con cobertura nacional (Equifax, Trans Union y Experian).	Positiva y negativa.	Los burós regionales alimentan de información a los nacionales.	El origen de éstas instituciones es espontáneo; surgen como respuesta a las necesidades comerciales de finales del siglo XIX. Además en los últimos años se ha observado cierta concentración, en los 1950's había 1700 burós y actualmente sólo hay 499 burós inscritos en la ACB.
España	Desde 1983, el Banco de España opera una central, en la cual se procesa información positiva y negativa de personas con deudas superiores a 1 millón de pesetas para residentes y a 50 millones de pesetas para no residentes.	Asnef-Equifax, es una fusión activa entre la Asociación de Instituciones Financieras Españolas y Equifax, creada en 1994. En el verano de 1999, el buró de crédito de Experian e Informa inicia operaciones.	Asnef-Equifax sólo maneja información negativa.	No hay intercambio de información.	Debido a que el buró público procesa información para deudores con deudas muy grandes, existe una considerable porción del mercado para los burós privados.
Italia	Desde 1964, el Banco Central de Italia opera una central, la cual procesa información negativa de deudas mayores a 150 millones de liras, y cualquier crédito en cartera vencida.	Una empresa fundada a fines de los 1980s por los banqueros italianos, llamada CRIF, ofrece servicios de buró de crédito a bancos e instituciones financieras. Al inicio de los 1990s, Experian (ex CNN) formó un buró de crédito, para compañías financieras.	Manejan información positiva y negativa.	NC	NC
Francia	Desde 1984, el Banco de Francia reporta información sobre empresas y desde 1990, los créditos vencidos de consumidores se reportan a una base de datos que contiene sólo información negativa.	Hasta hace pocos años, existía un buró de información negativa (CPII), administrado por la Asociación Francesa de Compañías Financieras. Actualmente, sólo el Banco de Francia maneja un buró.	Negativa.	No hay buró privado.	NC
Reino Unido	No hay ninguna institución pública que provea este servicio.	Actualmente hay dos burós de crédito privados que existen desde los 1980s: Experian (exCCN) y Equifax (unión de Grattan y Uapt-Infolink).	Positiva y negativa.	Positiva y negativa para compañías financieras y bancos locales y sólo negativa para bancos nacionales.	Se ha observado cierta concentración en la industria, pues hace 10 años había 4 burós privados y ahora sólo hay dos.
Japón	No hay ninguna institución pública que provea este servicio.	Hay tres grandes burós especializados: uno afiliado a los bancos (KSC); otro para compañías de ventas a crédito, es decir, comercial (CIC); y otro para compañías de financiamiento al consumidor (JIC). Además hay un cuarto buró (CCB) que abarca sector bancario y el comercial.	Positiva y negativa.	Los tres burós especializados comparten información negativa entre sí, a través de una red electrónica llamada CRIN	La especialización de los burós tiene como efecto que el compartir información no represente el riesgo de perder mercado. También se ha observado concentración; en los 1970's había al menos 30 burós, y actualmente sólo hay 4.
Australia	No existe ningún buró público.	Existen dos burós privados nacionales: CRL y Dun & Bradstreet Australia. Además hay un buró regional en Tasmania (TCS).	Negativa, la ley de privacidad prohíbe que se reporte información positiva.	Se comparte información negativa entre el buró nacional y el regional.	CRL tiene aproximadamente el 90% de las solicitudes de crédito personales y el 10% de las pequeñas y medianas empresas, mientras que D&B controla a las grandes.